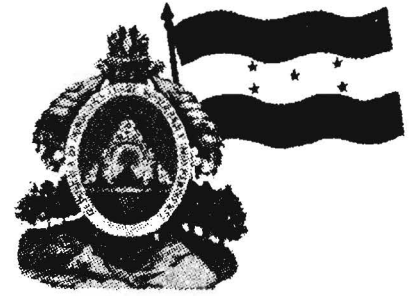


La Gaceta



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXXXII TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SÁBADO 26 DE DICIEMBRE DEL 2009. NUM. 32,098

Sección A

Poder Legislativo

DECRETO No. 57-2009

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que el Parque Nacional Montaña de Celaque es Área Protegida a la cual es deber del Estado conservar y proteger íntegramente los recursos naturales, así como asegurar la conservación de los ecosistemas.

CONSIDERANDO: Que el Estado, por razones de orden público e interés social, debe reservarse el control de los recursos naturales para regular el aprovechamiento técnico y racional de los mismos y en función de esto y para garantizar los procedimientos es necesaria la existencia de una autoridad administradora y dotar a esta con los instrumentos legales, institucionales y financieros adecuados para ordenar, controlar el uso y mejorar las opciones de conservación del Parque Nacional Montaña de Celaque.

CONSIDERANDO: Que el Parque Nacional Montaña de Celaque no sólo beneficia a más de ciento veinte (120)

SUMARIO

Sección A Decretos y Acuerdos

57-2009	PODER LEGISLATIVO Decreta: LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE CELAQUE, PROCELAQUE.	A. 1-8
151-2009	Decreta: LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER).	A. 8-39
	AVANCE	A. 40
Sección B Avisos Legales Desprendible para su comodidad		B. 1-12

comunidades en once (11) municipios que están a su alrededor, sino que también beneficia a los municipios del Valle de Sula proporcionándoles agua para consumo humano, riego para cultivos, fuente de oxígeno y su bosque regula hidrológicamente el Río Ulúa y es patrimonio natural de todos los hondureños.

CONSIDERANDO: Que el Parque genera bienes y servicios ambientales y sumado a su biodiversidad y atractivo turístico representa un potencial para el desarrollo sostenible que debe ser promovido y

fomentado, contribuyendo a la reducción de la pobreza de los pobladores de la región occidental del país.

CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo a través de la Administración Forestal del Estado firmó un Convenio de Comanejo con los once (11) Municipios que integran el Comité Local de Área Protegida (COLAP) del Parque Nacional Montaña de Celaque en el año 2006 con vigencia hasta el año 2010.

CONSIDERANDO: Que los Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque, se han constituido en Mancomunidad específicamente para el Comanejo del Parque Celaque y han obtenido su Personería Jurídica mediante Resolución No.642-2008.

CONSIDERANDO: Que la institucionalidad del Comanejo de esta área protegida requiere de mecanismos que aseguren su sostenibilidad técnica y financiera bajo los principios de descentralización, desconcentración y subsidiariedad y que el Congreso Nacional debe fomentar y apoyar con la legislación estos mecanismos y mediante ley especial se puede apoyar las instituciones siempre que garanticen el cumplimiento de los requisitos y finalidades que establece la Constitución de la República.

POR TANTO,

DECRETA:

CAPÍTULO I

**LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN
DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA
DE CELAQUE, PROCELAQUE.**

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por finalidad, establecer las bases institucionales, técnicas y operativas; los principios, regulaciones y disposiciones para la gestión sostenible del Parque Nacional Montaña de Celaque y de sus recursos naturales renovables y no renovables, asimismo, para concentrar la atención del Estado y de sus habitantes en una gestión de desarrollo integrada y participativa.

Las disposiciones contenidas en esta Ley son de interés público.

ARTÍCULO 2.- Consecuentemente a lo señalado en el Artículo anterior, se establece el ordenamiento territorial y la regulación de los recursos naturales renovables y no renovables del Parque Nacional Celaque, en cuanto a su conservación, protección, valoración y aprovechamiento sostenible.

CAPÍTULO II

OBJETIVO Y DOMICILIO

ARTÍCULO 3.- Reconocerse la Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña Celaque como

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

P.M. FERNANDO CALDERÓN ROMERO
Gerente General

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ CASTILLO
Coordinador y Supervisor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 230-4956
Administración: 230-3026
Planta: 230-8767

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

la Autoridad para la Protección, Manejo y Promoción del Parque Nacional Celaque, incluyendo a los Diputados de los Departamentos de Lempira, Copán y Ocotepeque, en concepto de Comanejo con el Estado de Honduras, la cual para los efectos de esta Ley se identificará como PROCELAQUE; como un organismo regulador que funcionará con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y de gestión, adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para efectos presupuestarios. Tiene su domicilio en el Municipio de Gracias, Departamento de Lempira y su duración será indefinida.

ARTÍCULO 4.- PROCELAQUE facilitará la constitución representada de las instituciones del Gobierno y de la sociedad civil en el Comité Local de Área Protegida de Celaque (COLAP Celaque) según el Reglamento actual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y sus reformas normativas futuras.

ARTÍCULO 5.- Localización y límites. El Parque Nacional Celaque, PROCELAQUE está localizado en el Occidente de la República de Honduras, Centro América, en el punto de intersección de los Departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira. Cerca del setenta y tres por ciento (73%) del área del Parque se ubica en el Departamento de Lempira, el veintidós por ciento (22%) en el Departamento de Ocotepeque y sólo el cinco por

ciento (5%) en el Departamento de Copán. Las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional para su ubicación son las siguientes:

No.2459 I, Corquín.

No.2459 II, Gracias.

No.2459 IV, San Marcos de Ocotepeque.

No.2459 III, La Campa

La figura del PNMC es un polígono irregular, donde la Estación No.1 se encuentra a 88°37'30" Longitud Oeste y a 14°34'20" Latitud Norte, finaliza en la Estación No.14 a 88°38'10" Longitud Oeste y a 14°35'50" Latitud Norte (Véase Cuadro No.1).

Limitan al PNMC nueve (9) Municipios: San Manuel de Colohete, La Campa, San Marcos de Caiquín, Gracias, Las Flores y Talgua, en el Departamento de Lempira; Corquín y San Pedro de Copán, en el Departamento de Copán; Belén Gualcho, en el Departamento de Ocotepeque. De estos municipios sólo San Manuel de Colohete, Gracias, San Pedro de Copán, Corquín, Belén Gualcho y Las Flores tienen jurisdicción en las zonas de núcleo y/o amortiguamiento.

En 1993, el Proyecto CONSEFORH recomendaba usar la cota de 1,800 msnm como límite de la zona núcleo y establecer una zona de amortiguamiento con los vértices siguientes:

Estación	Elevación msnm	Rumbo (°)	Distancia metros	Longitud Oeste	Latitud Norte	UTM	
						Norte	Este
1-2	1,121	S 00°00'	5,100	88° 37' 30"	14° 34' 20"	161160	32503
2-3	1,303	S 34°00' O	2,350	88° 37' 20"	14° 31' 40"	160650	32505
3-4	1,481	S 19°00' O	2,150	88° 38' 10"	14° 30' 30"	160455	32370
4-5	1,467	S 38°00' O	4,300	88° 38' 30"	14° 29' 30"	160260	32300
5-6	1,831	S 83°00' O	11,750	88° 40' 00"	14° 27' 40"	169920	32040
6-7	1,920	N 07°15' E	7,150	88° 46' 30"	14° 26' 50"	169775	30875
7-8	1,940	N 54°45' O	3,850	88° 46' 00"	14° 30' 40"	160485	30960
8-9	1,859	N 21°45' O	2,500	88° 47' 50"	14° 31' 50"	160710	30635
9-10	1,423	N 48°45' E	6,650	88° 48' 20"	14° 33' 10"	160940	30545
10-11	1,542	N 54°15' E	6,200	88° 45' 30"	14° 35' 30"	161380	31050
11-12	1,462	S 71°00' E	3,450	88° 42' 50"	14° 37' 30"	161745	31550
12-13	1,542	S 82°00' E	3,050	88° 41' 00"	14° 36' 50"	161630	31880
13-14	1,220	S 51°00' E	2,400	88° 39' 20"	14° 36' 40"	161585	32175
14-1	1,148	S 27°00' E	3,050	88° 38' 10"	14° 35' 50"	161435	32365

CAPÍTULO III ATRIBUCIONES Y SUS ÓRGANOS

ARTÍCULO 5.- Corresponderá a la MANCOMUNIDAD-PROCELAQUE las atribuciones siguientes:

- 1) Vigilar el cumplimiento de leyes, tratados, convenios, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, contratos, resoluciones y otras normas aplicables en materia de la gestión del Parque Nacional Celaque, que deban ser observadas por parte de entidades públicas y privadas y los ciudadanos y sus organizaciones, en particular aquellas disposiciones aplicables para la sostenibilidad, conservación, protección, ordenamiento y los aprovechamientos del área y sus recursos naturales;
- 2) Elaborar la propuesta del Plan de Gestión Operativo anual del Parque, considerando los estudios de balance hídrico, servicio ambiental de regulación hídrica del bosque y según el Plan de Manejo y otros planes e investigaciones;
- 3) Proponer para su aprobación ante la autoridad competente y el Congreso Nacional la normativa que estime necesaria para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
- 4) Someter ante la autoridad forestal del Estado la emisión de acuerdos y resoluciones de conformidad con la Ley en el marco de sus competencias;
- 5) Emitir los dictámenes y hacer requerimientos a entidades del Gobierno Central y municipalidades en el marco de sus competencias. Estos dictámenes o requerimientos son vinculantes en cuanto a como deben ser ejecutados o impugnados legalmente;
- 6) Asegurarse del funcionamiento de una Unidad Técnica Administrativa para los efectos de tramitar solicitudes y permisos que otorguen las autoridades en relación a su gestión;
- 7) Nombrar el personal para el funcionamiento de la Unidad Técnica de la MANCOMUNIDAD-PROCELAQUE;
- 8) Reglamentar el funcionamiento interno de las unidades administrativas y técnicas de la MANCOMUNIDAD-PROCELAQUE, según se requieran para su funcionamiento, incluyendo mecanismos, instrumentos e instancias en el orden financiero;
- 9) Aplicar el marco sancionario en el ámbito de su competencia y velar porque otras autoridades competentes apliquen la legislación que les correspondan;
- 10) Presentar informes de ejecución técnica financiera trimestralmente al Congreso Nacional en relación a sus actividades;
- 11) Elaborar y plantear propuestas científicas y técnicas y sobre proyectos con sus respectivos planes y procedimientos de implementación;
- 12) Proponer, dictar o ejecutar todas las medidas necesarias para gestionar racionalmente y en forma sostenida los recursos turísticos y naturales renovables y no renovables de las Cuencas que se derivan del Parque Celaque, en particular, controlar el patrimonio de recursos hídricos y forestales, en combinación con las autoridades competentes;

- 13) Establecer mecanismos, metodologías, procesos e instrumentos que permitan la valoración de los recursos, bienes y servicios ambientales y turísticos existentes en el Parque, involucrando a los beneficiarios locales, regionales y extra regionales según corresponda a los mismos;
- 14) Apoyar la coordinación en las actividades de los organismos públicos, centralizados o descentralizados, con competencias legales en el área del parque, así como con las organizaciones privadas o no gubernamentales con intereses económicos sociales o ambientales en la misma jurisdicción;
- 15) Coordinar los mecanismos de control y vigilancia en el Parque en relación con la aplicación de resoluciones dictadas por otras instituciones competentes, organizando la guardia forestal del Parque y reglamentando su operación y funcionamiento;
- 16) Proponer, impulsar y desarrollar actividades y estudios técnicos y científicos conforme al objetivo del Plan de Manejo del Parque Celaque y los propósitos de esta Ley;
- 17) Gestionar o realizar auditorías ambientales y estudios de impacto ambiental;
- 18) Realizar las acciones de inspección técnica legal y científica, fundamentándose en la normativa vigente y los estudios científicos. Las entidades públicas y privadas intervenidas prestarán su colaboración;
- 19) Establecer los criterios, parámetros o referentes, fundamentados en estudios técnicos bajo los cuales se definirán los cánones, tasas, contribuciones y otros exacciones o cargas, así como, las multas y otras sanciones y medidas que deban aplicar las autoridades competentes en cuanto a la gestión en el Parque Nacional Celaque;
- 20) Velar la existencia y vigencia de los instrumentos de ordenamiento territorial por parte de todas las entidades nacionales y municipales en sus respectivos campos de competencia, con sus respectivos marcos reguladores y en general velar por el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial;
- 21) Presentar denuncias ante las instituciones competentes, por infracciones que se cometan dentro del Parque Nacional Celaque y contribuir para la evacuación de las mismas;
- 22) Dictaminar sobre proyectos de desarrollo o inversión a ejecutarse en el área.
- 23) Orientar la gestión turística del Parque y dar seguimiento al Plan de uso Público Turístico actualmente aprobado, mediante procesos administrativos apropiados, participativos y sostenibles; y,
- 24) Las demás que se establezcan en esta Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO IV

PATRIMONIO Y CONTROL FINANCIERO

ARTÍCULO 7.- Los recursos de PROCELAQUE estarán constituidos por:

- 1) Los bienes y valores que el Estado le transfiera;

- 2) Las asignaciones presupuestarias consignadas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República;
- 3) Las herencias, legados o donaciones procedentes de personas nacionales e internacionales; y,
- 4) Los que los estatutos de constitución y personería jurídica definen.

ARTÍCULO 8.- Para lograr cumplir los objetivos de la presente Ley, se establecerá una partida anual presupuestaria de Tres Millones de Lempiras (L. 3,000,000.00), para el fomento y seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo, los cuales provendrán del Fondo de Aéreas Protegidas y Vida Silvestre, creado en el marco de la Ley Forestal vigente, Decreto 98-2007, de fecha 19 de Septiembre de 2007, Capítulo 5, Artículo 35), el cual será actualizado en función de la inflación reconocida por el Banco Central de Honduras. Tres Millones de Lempiras (3,000.000.00) para las campañas de protección forestal y combate de incendios y reforestación en los once (11) municipios de influencia miembros de MANCOMUNIDAD-PROCELAQUE y que provendrá del Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones. (Decreto 98-2007, de fecha 19 de Septiembre de 2007, Capítulo 5, Artículo 35), el cual será actualizado en función de la inflación reconocida por el Banco Central de Honduras. Dos Millones de Lempiras (L.2,000.000.00) para el fomento y seguimiento a la ejecución del Plan de Uso Público Turístico asignados presupuestariamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas el cual será actualizado en función de la inflación reconocida por el Banco Central de Honduras. Dos Millones de Lempiras (L.2,000,000.00) para el fortalecimiento y administración de la Unidad Técnica

de la Mancomunidad de Municipios asignados presupuestariamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. El cual será actualizado en función de la inflación reconocida por el Banco Central de Honduras.

ARTÍCULO 9.- La autoridad PROCELAQUE preparará y someterá a aprobación el Plan Operativo Anual y presupuesto respectivo de la ejecución de los según los lineamientos de la Secretaría Estado en el Despacho de Finanzas en función de las partidas establecidas en esta Ley.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 10.- A efecto de iniciar de inmediato la campaña de protección 2008-2009 del Parque Nacional Celaque asignar una partida presupuestaria de Dos Millones de Lempiras (L.2.000,000.00) como ampliación al presupuesto del 2008 del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y que serán canalizados bajo el mecanismo del Convenio de Comanejo a los Municipios de Celaque a través de la Región Forestal de Occidente.

ARTÍCULO 11.- El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a través de la Región Forestal de Occidente preparará el presupuesto, asesorará los planes municipales de protección, y establecerá mecanismos de asistencia, monitoreo y liquidación administrativa.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 12.- La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo a través del

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) dentro de los ciento ochenta (180) días a la entrada en vigencia de esta Ley.

ARTÍCULO 13.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los quince días del mes de abril del dos mil nueve.

ROBERTO MICHELETTI BAÍN
PRESIDENTE

JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA PAZ
SECRETARIO

GONZALO ANTONIO RIVERA
SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto, Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., de abril de 2009.

JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE FINANZAS.

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE.

*Sancionado en aplicación del Artículo 216, Párrafo
Segundo de la Constitución de la República*

Poder Legislativo

DECRETO No. 151-2009

El Congreso Nacional,

CONSIDERANDO: Que nuestro planeta tierra está sufriendo cambios climáticos con consecuencias y efectos más intensos en los territorios de las naciones y por nuestra posición geográfica estamos en la vía de los fenómenos meteorológicos que se forman en el Océano Atlántico, cerca de las costas africanas.

CONSIDERANDO: Que las presiones antropogénicas sobre el medio ambiente en todo el planeta, han desequilibrado las cadenas y zonas de vida necesarias para nuestra existencia; la sobreexplotación de los bosques, de las fuentes marinas, del recurso agua y las fuentes combustibles líquidas y sólidas trae como consecuencia la fragilidad de nuestros ecosistemas, la emisión mayor de gases nocivos para la vida, la pérdida irremediable de especies importantes para el equilibrio ecológico, el agotamiento de recursos vitales, produciendo, por ende, la construcción de escenarios de peligro, el rompimiento de cadenas o niveles tróficos y desorden en el desarrollo.

CONSIDERANDO: Que sumados a los efectos del cambio climático y a las presiones antropogénicas, nuestro territorio también es propenso a otros tipos de fenómenos, tal como el terremoto ocurrido en la madrugada del 28 de mayo de 2009, con una intensidad

de 7.1 en la Escala de Richter, tipo de eventos que se creía estábamos libres de sufrirlos por no ser frecuentes en nuestro país, a pesar de que los registros históricos nos ilustran algunos eventos telúricos, como el ocurrido en el año de 1774 el cual afectó los Departamentos de Comayagua, La Paz, Gracias y Copán (Lawrence Feldman: Catálogo de Terremotos en Honduras: 1539-1934), y otros de menor intensidad, tal como el sucedido entre los Departamentos de Yoro y Francisco Morazán, en el Municipio de Marale, que se produjo el 15 de Septiembre de 2007 con una magnitud de 4.0 en la Escala de Richter.

CONSIDERANDO: Que debido al incremento de tales eventos, es un deber del Estado de Honduras garantizar que la vida de las personas que habitan el territorio nacional se desarrolle plenamente, respetando la dignidad inherente a todo ser humano, en condiciones de seguridad para sus vidas, su integridad física y sus bienes materiales.

CONSIDERANDO: Que a pesar de existir distintas instituciones públicas y privadas con competencias y funciones relacionadas con la Gestión de Riesgos derivados de amenazas naturales y antropogénicas, es necesario garantizar que cada una de estas instancias actúe orientando su accionar hacia la prevención y reducción de riesgos con la disposición de integrarse a las estructuras organizativas requeridas para que dicha prevención y reducción de riesgos sea efectiva y garantice un impacto más eficiente en la prevención, mitigación, adaptación, manejo financiero de los riesgos

y desastres, preparativos, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los efectos ocasionados por el impacto de los fenómenos naturales, socio naturales y de origen antropogénico.

CONSIDERANDO: Que la Resolución No.42/169 de la Organización de las Naciones Unidas declaró la década de los noventa como “Decenio Internacional para la Reducción de Desastres” y su continuidad a partir del año 2000 como la “Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres”, en la que se insta a los países miembros de la Organización a armonizar y actualizar sus respectivos ordenamientos jurídicos en materia de desastres, consolidando una legislación específica.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo No.361-2005, El Presidente de la República en Consejo de Ministros estableció aprobar la Política Ambiental de Honduras, la cual bajo su Título Cuarto, Apartado Tercero establece la Política Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales estableciendo que “el Estado, fortalecerá el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales, con especial énfasis sobre la reducción del riesgo, la alerta temprana y mejorando las condiciones de las zonas de alta vulnerabilidad”.

CONSIDERANDO: Que es de mayor importancia para la seguridad y el desarrollo nacional incorporar la gestión del riesgo como parte integral del proceso de transformación y desarrollo sostenible en las políticas, planes, programas y proyectos en el ámbito local y nacional.

POR TANTO,

DECRETA:

La siguiente:

**LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN DE RIESGOS
(SINAGER)**

CAPÍTULO I

**DEL OBJETO Y MARCO REGULATORIO DE LA
PRESENTE LEY**

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA LEY. La presente Ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, el cual también será conocido con las siglas de "SINAGER", constituyendo el marco legal hondureño orientado a que el país cuente y desarrolle la capacidad de prevenir y disminuir los riesgos de potenciales desastres, además, de prepararnos, responder y recuperarnos de los daños reales provocados por los fenómenos naturales que nos impacten o por aquellos generados por las actividades humanas.

ARTÍCULO 2.- MARCO DE REGULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) se regulará en un marco institucional, el cual comprenderá a todos los sectores de la sociedad hondureña, tanto para las instituciones existentes como para las que lleguen a existir, sin exclusión alguna. Tales sectores son el público y el privado, identificándose en los mismos al Gobierno Central, los órganos desconcentrados y descentralizados, así como las entidades autónomas, la empresa privada, las

organizaciones obreras y campesinas; las diferentes organizaciones de desarrollo reconocidas en el país y todas aquellas organizaciones aglutinadas en la denominada sociedad civil; las de género y de grupos étnicos.

En dicho marco interinstitucional se definirán, planificarán y ejecutarán todas las acciones relacionadas con la prevención, adaptación al cambio climático y a otro tipo de eventos, manejo financiero del riesgo de desastres, preparación permanente y efectiva, la asistencia de ayuda humanitaria en caso de desastres y emergencia, a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por desastres, todo lo cual se encuentra comprendida dentro del concepto de "Gestión de Riesgos" referido en esta Ley.

CAPÍTULO II

**CONCEPTO, PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS DEL
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
(SINAGER).**

**ARTÍCULO 3.- CONCEPTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER).**

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es el conjunto sistémico, participativo y de articulación armónica de todas las instituciones del Estado, de la empresa privada y de las organizaciones de la sociedad civil del país. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) actúa a través de estructuras, instancias de coordinación, relaciones funcionales, métodos, herramientas y procedimientos, con el objeto de proteger la vida y los medios de vida de los habitantes de la República, mediante acciones concretas, destinadas a prevenir, reducir o controlar los niveles de riesgo en el territorio nacional, así como

contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente y a la protección de todo el patrimonio ecológico nacional.

Debido al más alto interés nacional, todas las personas naturales y las instituciones públicas y privadas, sin exclusión alguna, forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) siendo sujetas a ser llamadas a integrar obligatoriamente los órganos del sistema para ejecutar las acciones concretas que se le encomienden en materia de gestión de riesgos, todo dentro del ámbito de sus competencias establecidas en las leyes correspondientes, de sus planes de acciones y de sus capacidades reales.

ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se regirá por los principios siguientes:

- 1) **SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD:** Todas las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, tienen el derecho a la protección de su integridad física y psíquica, a la de su estructura productiva, de sus bienes y de su entorno ambiental frente a la construcción de escenarios de riesgos, buscando asegurar su supervivencia en condiciones compatibles con los principios de los derechos humanos.

Todo aquel que por acción u omisión, ponga en peligro, amenace o provoque daños a las personas y/o a sus bienes, construyendo, autorizando o permitiendo escenarios de riesgos, sea en forma culpable o negligente, quedan sujeto a las sanciones y penalidades establecidas en las leyes de la República y a resarcir al o los afectados por el daño causado.

Todo servidor del Estado, sea funcionario o empleado del Gobierno Central, de las entidades autónomas, de las municipalidades o de los entes desconcentrados y descentralizados, deben enmarcarse en el cumplimiento obligatorio de sus deberes y responsabilidades, tal como lo establece la Constitución de la República, para que sus acciones y decisiones no afecten negativamente, en la materia que trata esta Ley, a las personas naturales o jurídicas o a la misma institución donde brindan sus servicios;

- 2) **REDUCCIÓN DE RIESGOS COMO PROCESO SOCIAL:** El Gobierno Central y los Gobiernos Locales a través de sus instancias técnicas especializadas, están obligados a emitir disposiciones de cumplimiento obligatorio relacionada con la reducción del riesgo y las acciones concretas para reducir el posible daño, a fin de que las personas naturales y jurídicas estén obligadas a su acatamiento y cumplimiento y lograr con ello la reducción continua de la vulnerabilidad de la sociedad frente a los distintos fenómenos que nos amenazan. El no cumplimiento o retraso en el acatamiento de lo dispuesto en materia de riesgos, implica responsabilidad administrativa, civil y penal para los infractores.

Toda persona natural y jurídica, en cualquier ámbito de su acción social debe incluir obligatoriamente en sus planes y acciones de cualquier naturaleza una "Evaluación de Riesgos", a fin de prevenir y reducir al máximo la generación de posibles daños asimismo y a terceros, con el propósito de hacer la comunidad más segura y de no incurrir en responsabilidad por negligencia;

- 3) **GESTIÓN DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTRADA:** El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos

(SINAGER) actúa en el marco de las políticas de descentralización y desconcentración del Estado. La Administración Pública, los órganos o entidades desconcentradas funcional o territorialmente, así como la Administración Pública Descentralizada, tales como las instituciones autónomas y las municipalidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben asumir y ejecutar las tareas y acciones concretas en el territorio para cumplir, adecuada y oportunamente con su responsabilidad de prevención y reducción de riesgos, para prevenir y mitigar los desastres, adaptarse al cambio climático, dar respuesta a las emergencias y rehabilitar y reconstruir áreas afectadas.

4) **COORDINACIÓN:** La coordinación es el principio y función fundamental del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y se pone en práctica a partir del reconocimiento de las competencias, jurisdicción y autonomía de sus miembros, pero a la vez, dirigiendo las acciones de cada una de ellos, en forma sistémica, articulada, concertada y armónica hacia propósitos y objetivos comunes.

5) **PARTICIPACIÓN CIUDADANA:** El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) respeta la igualdad de oportunidades de las personas para la adopción, ejecución y evaluación de las políticas públicas y acepta que el fundamento de una gestión pública socialmente responsable debe comprender las opiniones de quienes participan en el accionar civil. Una gestión del riesgo efectiva y oportuna requiere de la más amplia participación ciudadana, tanto en la definición y planificación, como en la ejecución de las acciones multidisciplinarias y multisectoriales.

6) **INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO COMO PARTE DEL DESARROLLO NACIONAL:** La Gestión de Riesgos es una política de Estado de carácter permanente. Todas las entidades miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), del Sector Gubernamental y No Gubernamental deben incorporar en sus planes, programas y estrategias institucionales y territoriales, acciones concretas de Gestión de Riesgos. Los planes de reconstrucción deben contemplar obligatoriamente las medidas de reducción de riesgo, tomando en cuenta las nuevas experiencias, con la idea central de evitar en el futuro nuevos daños por similares causas.

7) **ALCANCE DE RESPONSABILIDADES:** Dado el carácter multisectorial y la pluralidad de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), su estructura, funciones y organización jerárquica serán determinadas mediante los mecanismos convencionales de organización. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) no sustituye las funciones y responsabilidades establecidas por las leyes y reglamentos constitutivos de las instituciones u organizaciones, sino que las refuerza, coordina, complementa y dirige hacia la reducción de riesgos.

8) **ÉTICA Y TRANSPARENCIA:** La ética, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas deben guiar todas las ejecutorias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Todas las acciones del Sistema deben tener la publicidad y ejecución necesaria, lo mismo que ser objeto de fiscalización y control por los sistemas de acuerdo a lo establecido en las leyes del país.

- 9) **DESARROLLO Y ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD.** Es fundamental para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) la corresponsabilidad y la debida colaboración entre sus integrantes como principio fundamental para lograr una efectiva disminución del riesgo en el país. El principio de solidaridad fomenta y promueve la necesaria colaboración entre los diferentes órganos, instituciones e instancias que conforman el sistema independientemente de sus ámbitos material y territorial, de competencia y las fortalezas o debilidades de los miembros.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) defiende la solidaridad centroamericana y extra regional como posición de una profunda solidaridad entre todos los seres humanos, aceptando que el planeta tierra es el hogar de todos los seres vivos. La solidaridad reconoce el principio de independencia de los pueblos y el destino común de quienes habitamos en el planeta.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) reafirma la obligación del Estado de garantizar la seguridad humana de los habitantes y organizará las múltiples expresiones de solidaridad nacional e internacionales; y,

- 10) **NO DISCRIMINACIÓN, ENFOQUE DE GÉNERO Y ACCIONES AFIRMATIVAS.** Las acciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) no están condicionadas por la edad, el credo, la raza o etnia, el género, la opción sexual, la condición de salud, económica, ideología, política o la nacionalidad de las personas. Sin embargo por sus condiciones de vulnerabilidad el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) debe priorizar la atención de los niños, niñas

y adolescentes, velando porque prevalezca el interés superior de éstos en todas las actividades que se realizan en pro de la prevención y atención de desastres. De igual manera priorizará la atención a las mujeres embarazadas, a las madres, los adultos mayores y de las personas con necesidades especiales debido a cualquier tipo de discapacidad; lo mismo hacia los grupos étnicos y personas que pertenecen a grupos de mayores limitaciones de recursos y de grupos en riesgo inminente. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) trata a dichos grupos de manera privilegiada y prioritaria, mediante acciones afirmativas en la gestión de riesgo.

Todos los anteriores principios orientarán las actuaciones de los órganos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y por ende de sus miembros, en la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley.

ARTÍCULO 5.- PROPÓSITO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER).

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) debe cumplir con el propósito fundamental de proteger la vida, los recursos materiales de existencia y el ambiente de todos las personas que habitan en el país; debiendo asegurarse que la sociedad entera trabaje coordinadamente para lograr una existencia digna, frente a los fenómenos naturales, socio naturales o de origen humano, capaces de generar situaciones de emergencia o desastre dentro del territorio.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) tendrá como ente coordinador a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), que cumpliendo con su objetivo fundamental y sus funciones de adopción de medidas preventivas y de coordinación que le manda la Ley.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) con la coordinación de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), debe promover, potenciar y concertar, con todas las organizaciones e instituciones del país, tanto del ámbito público como del privado, aquellas actividades concretas que, metodológicamente y de manera estandarizadas entre los sectores nacionales, deben ser programadas, presupuestadas y ejecutadas anualmente para lograr una efectiva Gestión de Riesgos.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) debe garantizar que la Administración Pública, centralizada, descentralizada, desconcentrada y autónoma, así como el sector privado y la sociedad civil organizada, con la coordinación de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en cumplimiento de su mandato legal, se integren y trabajen de forma armónica y articulada en las diferentes instancias nacionales y territoriales del Sistema.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS E INSTANCIAS DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER)

SECCIÓN I

DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTÍCULO 6.- CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). El Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), el cual será presidido por el titular del Poder Ejecutivo o por delegación temporal o permanente en quien él designe, estará constituido por los miembros permanentes que se señalan a continuación:

- 1) El titular del Poder Ejecutivo o su representante;
- 2) El Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO);
- 3) El o la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia o su representante;
- 4) El o la titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) o su representante;
- 5) El o la titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia o su representante;
- 6) El o la titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente o su representante;
- 7) El o la titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería o su representante;
- 8) El o la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o su representante;
- 9) El o la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas o su representante;
- 10) El o la titular de la Secretaría Técnica de Cooperación o su representante;
- 11) El o la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores o su representante;
- 12) El o la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

- 13) El o la titular o un representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);
- 14) Un o una representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);
- 15) Un o una representante de las organizaciones de trabajadores;
- 16) Un o una representante de las organizaciones campesinas;
- 17) Un o una representante de la Sociedad Civil designado por la Mesa Nacional de Gestión de Riesgos;
- 18) Un o una representante de las universidades;
- 19) Un o una representante de las instituciones de Primera Respuesta, escogido en una reunión que realizarán las mismas para tal efecto;
- 20) Un o una representante de la Comisión del Congreso Nacional de la República que trate sobre la materia de Gestión de Riesgos; y,
- 21) Un o una representante de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo.

También pueden participar como miembros, en calidad de temporales del Consejo Directivo, cualquier otra organización pública o privada del país, que para tal efecto se determine al interior del Consejo Directivo. El número total de miembros del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) en ningún momento excederá de veinticinco (25), de manera que dicho Consejo puede estar conformado por un máximo de veinte (20) miembros permanentes y cinco (5) temporales.

El Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) debe reunirse ordinariamente al menos tres (3) veces por año; una vez cada cuatrimestre y extraordinariamente todas las veces que sean necesarias, por convocatoria que les haga la Secretaria Ejecutiva.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), para cualquier efecto, tiene como sede y domicilio oficial la Capital de la República. En circunstancias especiales puede reunirse en cualquier lugar del territorio nacional que acuerden sus miembros.

Con la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y con el fin de eliminar la duplicidad de funciones, el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) asumirá, para todos los efectos, las funciones del Consejo Directivo de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

ARTÍCULO 7.- CONFORMACIÓN INTERNA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). El Sistema será presidido por el Titular del Poder Ejecutivo o por su representante. El Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) actuará como el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Los demás integrantes en su calidad de directivos tienen voz y voto para decidir sobre los asuntos que se traten al interior del Consejo Directivo. El Presidente del Consejo tendrá el poder de decidir por su calidad de voto.

ARTÍCULO 8.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

(SINAGER). El Consejo Directivo del Sistema tiene las funciones siguientes:

- 1) Orientar las políticas públicas, los planes estratégicos, los instrumentos legales necesarios para lograr la transversalización de la Gestión de Riesgos dentro de los planes de desarrollo y la cultura nacional, los que serán elaborados participativamente bajo la coordinación de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).
- 2) Recibir, analizar y ejecutar las propuestas de los Comités de Consulta, relacionadas con las políticas, estrategias, normativas y acciones concretas vinculadas con la Gestión de Riesgos en el país, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
- 3) Apoyar las acciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y asegurarse que dicha Comisión vele por la aplicación de las leyes, políticas, estrategias nacionales y planes operativos relacionados con la Gestión de Riesgos.
- 4) Promover al interior del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) las normativas requeridas para la instrumentación de las políticas y estrategias nacionales relacionadas con la Gestión de Riesgos.
- 5) Formalizar las disposiciones obligatorias elaboradas y presentadas por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) destinadas a reducir el riesgo en el quehacer nacional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.
- 6) Recomendar a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) el desarrollo de estrategias y acciones concretas para el fortalecimiento institucional de los entes públicos y privados miembros del Sistema de Gestión de Riesgos (SINAGER).
- 7) Presentar a los Comités de Consulta del Sistema de Gestión de Riesgos (SINAGER) el Plan Nacional de Gestión de Riesgos elaborado por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) para obtener sus recomendaciones y gestionar los recursos financieros, materiales y humanos para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
- 8) Aprobar los mecanismos y sistemas de indicadores que evalúen y monitoreen los avances en la ejecución del Plan Nacional de Gestión de Riesgos elaborado en forma coordinada entre los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
- 9) Analizar, evaluar y recomendar a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), la inclusión en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos cualquier aspecto derivado del cambio climático que haya sido omitido y desarrollar las estrategias correspondientes para la reducción de sus efectos negativos.
- 10) Orientar las actividades destinadas a organizar, coordinar y dirigir las acciones que sean necesarias ejecutar en casos de emergencia, desastres y calamidades que surjan en el país.
- 11) Definir y publicitar a través de la Secretaría Ejecutiva, todas aquellas disposiciones de carácter obligatorio, relativas a la Gestión de Riesgos en el país.

- 12) Aprobar y orientar los Planes de Trabajo Anual de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); y,
- 13) Todas las demás que le establezca la Ley.

SECCIÓN II

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER).

ARTÍCULO 9.- FUNCIÓN COORDINADORA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) es la Institución del Estado de Honduras redestinada para la coordinación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), siendo originalmente creada funcionalmente para organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación de todas las actividades de apoyo, de integración participativa, destinadas a proteger la vida, los bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) seguirá rigiéndose por su Ley de creación, asumiendo las funciones de prevención y las de carácter administrativo y ejecutivas que le amplíe esta Ley; entendiéndose que las nuevas funciones que se le establecen no son limitativas de las definidas en su Ley de creación, sino que las complementa, fortalece y amplía para que la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) asuma roles más extendidos.

Las funciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), son las siguientes:

- 1) Su Comisionado fungirá como Secretario Ejecutivo del Sistema y todos sus funcionarios trabajarán para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y el mejor alcance de su propósito;
- 2) Aplicar las políticas públicas, elaborar, revisar y actualizar el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y ejecutar coordinadamente los objetivos estratégicos del Sistema; promover junto con los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) los cuerpos legales, recursos y capacidades técnicas necesarias para lograr la transversalización de la Gestión de Riesgos entre todos los miembros del Sistema, así como dentro de los procesos de desarrollo y la cultura nacional, de acuerdo con las orientaciones del Consejo Directivo y recomendaciones de los Comités de Consulta del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER);
- 3) Organizar y ejecutar la Agenda del Consejo Directivo;
- 4) Velar porque se cumplan las disposiciones obligatorias necesarias para la instrumentación operativa de las políticas y estrategias nacionales relacionadas con la Gestión de Riesgos;
- 5) De acuerdo con lo que se dispone en el Reglamento de esta Ley, fijar las multas y sanciones administrativas pertinentes a las personas naturales o jurídicas que no acaten o retrasen el cumplimiento en debida forma de las disposiciones obligatorias establecidas. Sustanciar técnica y documentalmente los casos de responsabilidades civiles y penales para las instituciones investigadoras y acusadoras correspondientes, para que éstas actúen ante los órganos jurisdiccionales del país;

- 6) Hacer los llamados correspondientes a las personas naturales o jurídicas y publicitar las disposiciones relacionadas con el cumplimiento obligatorio de las acciones u omisiones encaminadas a la reducción de riesgos en el país;
- 7) Presentar para su aprobación por el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y de los planes y programas especiales nacionales, regionales, departamentales, municipales y sectoriales, destinados a consolidar las actividades relacionadas con la Gestión de Riesgos en el desarrollo. Coordinar la ejecución de dichos planes y programas;
- 8) Presentar al Consejo Directivo las disposiciones de cumplimiento obligatorio que deben ser formalizadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;
- 9) Coordinar la ejecución de las acciones directas relacionadas con la operatividad de las estrategias para el fortalecimiento institucional de todos los entes públicos y privados miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER);
- 10) Ejecutar, administrar, fortalecer y dirigir eficientemente los recursos financieros, materiales y humanos que le sean asignados, destinados a garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos;
- 11) Dar seguimiento a los mecanismos e indicadores creados dentro del Plan Nacional de Desarrollo, destinados a evaluar los avances institucionales en la Gestión de Riesgos en el país, y establecer coordinadamente las acciones correctivas que deben seguirse dentro del Sistema, para su efectiva aplicación. Apoyar y reforzar las capacidades de los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), para alcanzar los resultados previstos;
- 12) Analizar, evaluar, prever y coordinar la atención de los riesgos derivados del cambio climático y proponer al Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) la ejecución de nuevas estrategias para la reducción de sus efectos negativos;
- 13) Coordinar las acciones necesarias para prevenir los desastres. Actuar en respuesta a las emergencias y calamidades que surjan en el país y procurar coordinadamente a la recuperación más segura de las personas y de los territorios afectados;
- 14) Gestionar ante la comunidad nacional e internacional la obtención de recursos financieros y materiales en calidad de donaciones, sin detrimento de los recursos asignados en el Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la República, que se le aprueben anualmente para sus operaciones ordinarias, ni del Fondo Nacional para la Atención de Emergencias, exclusivos para responder a eventos de catástrofe que se presenten eventualmente;
- 15) Sugerir dentro del Sistema la Formación de Comisiones de Trabajo de cualquier naturaleza para el logro de objetivos específicos establecidos en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos;
- 16) Dictaminar coordinadamente sobre las zonas de riesgo y las acciones obligatorias para disminuir su vulnerabilidad;
- 17) Elevar al Consejo Directivo para su formalización, el establecimiento de las disposiciones de acatamiento

obligatorio que deben ser establecidas para regular la construcción del riesgo en el país;

- 18) Organizar las unidades técnicas, con la estructura necesaria para cumplir con los objetivos generales y específicos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos del país;
- 19) El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), con su firma autorizará los actos, contratos y todo lo relacionado con los asuntos propios del Sistema;
- 20) Crear, fortalecer y apoyar la conformación de Comisiones y Mesas de Trabajo de cualquier naturaleza destinadas a la ejecución de acciones ad-hoc o permanentes, relacionadas con la Gestión de Riesgos en el país;
- 21) Coordinar toda la ayuda y asistencia nacional e internacional destinada a las personas y comunidades afectadas por desastres y emergencias;
- 22) Por mandamiento del Consejo Directivo, establecer las disposiciones permanentes y temporales de cumplimiento obligatorio en situaciones de alerta o desastre;
- 23) Preparar el informe a la Presidencia del Consejo, entes internacionales y otras instituciones que provean ayuda;
y,
- 24) Las demás que se señalen en esta Ley y su Ley de creación y que no entren en conflicto; debiendo haber preeminencia de las que aquí se han dispuesto.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) establecerá alianzas dentro de los procesos de licenciamiento, a ser otorgados por otros entes estatales, para que de manera obligatoria se incluya el análisis de riesgos, siguiendo metodologías científicas, antes de que se concedan las licencias respectivas.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), por su condición de institución técnica del Estado de alto interés público, creada para coordinar todas las acciones nacionales destinadas a proteger la vida, los bienes y el ambiente de los que viven en el territorio nacional, gozará de la exención del pago del Impuesto Sobre la Renta, así como del pago del Impuesto al Activo Neto y la Aportación Solidaria Temporal. Los bienes y servicios adquiridos por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el mercado nacional, estarán exonerados del pago del Impuesto Sobre Ventas.

ARTÍCULO 10.- DE LAS PETICIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), por medio de su Secretaría General, puede dirigirse y hacer solicitudes en forma directa a los organismos e instituciones públicas en general, sin mediar formalidad ni jerarquía alguna, lo mismo que a los organismos o instituciones de carácter privado, igualmente a cualquier persona natural. Las peticiones serán dirigidas a los titulares de las instituciones o hacia aquellos que deban contestar tales peticiones y facilitar los requerimientos que se les hagan, acatando en forma diligente lo solicitado para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

Los plazos de contestación serán los que están determinados en las otras leyes generales y especiales, de acuerdo a la forma y tipo de solicitud; igualmente deben ser determinados a nivel del Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 11.- LIBERTAD DE ACCESO. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), con su personal debidamente autorizado y en el cumplimiento de sus funciones dentro del Sistema, ante el eminente estado de necesidad de riesgo, siempre que su acción esté relacionada con la Gestión de Riesgo, tiene libre acceso a todas las dependencias civiles y militares, así como a las instituciones públicas y a las privadas, sin objeción alguna; todo bajo el estricto respeto a las disposiciones constitucionales y lo establecido en las leyes generales y especiales.

ARTÍCULO 12.- INDEPENDENCIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA. Debido a la naturaleza de sus funciones dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), que obligan a la respuesta inmediata ante amenazas de eventos o desastre, el Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, gozará de independencia funcional, administrativa, técnica y financiera.

En situaciones de alerta y respuesta por emergencias, las decisiones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), que deben ejecutar la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y sus altos funcionarios, serán de cumplimiento obligatorio e inmediato por todas las personas, en función de proteger sus vidas y sus bienes; por lo tanto, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), para minimizar los daños que pueda causar un evento, puede utilizar o disponer de los bienes públicos o privados necesarios, que estén más a su alcance; priorizando más el interés y protección de la vida de los seres humanos, sobre el interés económico de un bien mueble o inmueble. El Estado debe reponer, reparar o cancelar el valor comercial de los bienes utilizados para

proteger la vida y la salud de los hondureños durante un evento catastrófico o una amenaza, resarciendo el valor de los mismos a su o sus legítimos dueños, quienes deben reclamar en debida forma y como en derecho corresponda.

SECCIÓN III

OTROS ÓRGANOS DE INTEGRACIÓN Y CONSULTA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER)

ARTÍCULO 13.- LOS COMITÉS DE CONSULTA. Son órganos participativos y deliberativos, que actúan como espacios de consulta, reflexión, concertación y análisis sobre el estado de la Gestión de Riesgos en el país y como fuente de propuestas para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) sobre nuevas políticas, estrategias, programas, proyectos, actividades o acciones relacionadas con la Gestión de Riesgos que deben incluirse en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos a ser ejecutado por la Secretaría Ejecutiva.

Los Comités de Consulta abordarán las temáticas de prevención, preparación y respuesta y rehabilitación, reconstrucción y transferencia de riesgos. De acuerdo a la funcionalidad, tales Comités estarán integrados por las instituciones del Gobierno Central, los órganos desconcentrados y descentralizados, los gobiernos locales, la Sociedad Civil, ONG's, las organizaciones de obreros, empresarios y campesinos, las instituciones de primera respuesta; siendo sus representantes del más alto nivel de cada una de las instituciones que los integran. La agenda a tratar en cada Comité será determinada por el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). El Reglamento de la Ley definirá los mecanismos de participación y la determinación de la integración de cada uno de tales Comités.

Los Comités de Consulta, tienen los deberes siguientes:

- 1) Participar en la aprobación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos;
- 2) Considerar y discutir las manifestaciones e impactos de los riesgos y desastres en el territorio nacional a fin de que sean incluidos dentro del Plan Nacional de Gestión de Riesgos;
- 3) Debatir y sugerir para consideración del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), el diseño y ejecución de políticas, programas y acciones para prevenir y reducir los riesgos;
- 4) Considerar y debatir nuevos desarrollos conceptuales, tecnológicos, sociales y de cualquier otra índole en el área de riesgos y de desastres;
- 5) Recomendar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema la conformación de Comisiones o Mesas de Trabajo;
- 6) Sugerir de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, a un máximo de seis (6) miembros temporales para formar parte del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER);
- 7) Analizar los logros y avances, los problemas y desaciertos de la Gestión del Riesgo en el país y sugerir mecanismos de superación; y,
- 8) Recibir informes de la Secretaría Ejecutiva sobre el avance de los logros de los resultados esperados de la ejecución del Plan Nacional de Gestión de Riesgos.

Los Comités de Consulta se instalarán de forma ordinaria al menos una vez durante el primer semestre de cada año y en forma extraordinaria cuando sea requerido, a convocatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), conforme al Reglamento.

ARTÍCULO 14.- COMISIONES DE TRABAJO, MESAS NACIONALES Y MESAS REGIONALES. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), por medio de su Secretario Ejecutivo, facilitará la creación y creará Comisiones de Trabajo y Mesas Territoriales que se consideren pertinentes, en las cuales, con la facilitación de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), las municipalidades y las mancomunidades pueden liderarlas junto con la participación de los actores locales claves. Dichas comisiones y mesas deben estar destinadas a estudiar un tema específico, trabajar sobre aspectos de interés en algún sector o grupos sectoriales, desarrollar consultas territoriales para el fortalecimiento de capacidades en cualquier área o para temas ad-hoc, según sea necesario y los recursos institucionales lo permitan.

Las Comisiones y Mesas trabajarán dentro de un Reglamento Interno elaborado por ellas mismas, conforme a los objetivos esperados. Dichos reglamentos deben ser inscritos en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

En virtud de lo establecido en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) reconoce y hace suya la organización territorial existente a través de los Comité de Emergencia Departamentales (CODED); Comité de Emergencia Municipales (CODEM); Comité de Emergencia Locales (CODELES); Comité de Emergencia Centros Escolares

(CODECE); Comité de Emergencia Centros Laborales (CEDECEL); y lo mismo que las Mesas de Gestión de Riesgo existentes de hecho o establecidas en otras leyes del país. El Reglamento de esta Ley establecerá las funciones, organización mínima y los diferentes aspectos relacionados con la operatividad de estos Comités.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), con asistencia técnica de su equipo técnico será el encargado de facilitar la elaboración de los Planes de Trabajo de las Comisiones y Mesas, darle seguimiento a los resultados y acompañar la presentación de los informes de avance y finales del trabajo realizado.

ARTÍCULO 15.- OBLIGATORIEDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). La participación de los órganos e instancias de coordinación, nacionales y territoriales, de las instituciones públicas y privadas en el Consejo Consultivo, Asamblea General, Comisiones y Mesas de Trabajo, será obligatoria. La falta de participación de manera parcial o total, generará las responsabilidades señaladas en la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 16.- VOLUNTARIADO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). El voluntariado del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) es el espacio de participación ciudadana más amplio del Sistema. Se coordinará desde una unidad especial en la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en él se permitirá la participación de cualquier persona. Los voluntarios estarán organizados en diferentes ramas, dependiendo de sus capacidades y las preferencias de los interesados. Pueden ser voluntarios todas las personas naturales

o jurídicas dentro o fuera del territorio nacional que deseen apoyar los esfuerzos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), siempre y cuando se comprometan a cumplir con los principios de esta Ley y los principios y reglamentos propios del voluntariado incluidos dentro del Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 17.- CENTRO DE OPERACIÓN Y EMERGENCIA NACIONAL (COEN). El Centro de Operación y Emergencia Nacional (COEN) es la Organización necesaria para la administración, adecuación de las emergencias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Será organizado, dirigido y coordinado por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Su estructura y organización será diferente según la intensidad y gravedad de la emergencia o fenómeno que nos amenace o afecte. El Centro de Operación y Emergencia Nacional (COEN) contará con un Manual de Funciones Básicas, elaborado por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) que se considerará parte reglamentaria de esta Ley.

El Centro de Operación y Emergencia Nacional (COEN) se instalará, operará y se disolverá por instrucciones del Jefe Nacional de Operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y con el visto bueno del Comisionado o Subcomisionados Nacionales de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). En casos de alerta y emergencia se conformará por todos los actores que sean llamados a integrarlo. El llamado a participar en el Centro de Operaciones y Emergencia Nacional (COEN) es de obligatorio cumplimiento.

La no comparecencia inmediata de una institución o persona será considerada como falta grave y acarreará las

responsabilidades administrativas y multas establecidas en el Reglamento de esta Ley y en otras leyes de la República.

Todos los miembros del Centro de Operación y Emergencia Nacional (COEN) serán personas del más alto nivel, relacionadas directamente con las más altas autoridades de cada una de las organizaciones a las que pertenezcan. Para realizar su trabajo recibirán el entrenamiento adecuado por parte de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

Como parte del Centro de Operación y Emergencia Nacional (COEN) y cuando sea necesario y según lo establezca el mismo Manual del Centro de Operación y Emergencia Nacional (COEN), se organizará el Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria Internacional que será conocido como "CCAHI", el cual se encargará de coordinar toda la Ayuda Internacional que reciba Honduras en caso de un desastre. El Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria Internacional (CCAHI) tendrá su propio manual de funcionamiento.

La Secretaría Técnica de Cooperación (SETCO) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores serán las instituciones encargadas de dar asistencia técnica y apoyo a Sistema para lograr el buen funcionamiento del Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria Internacional (CCAHI), según lo establezca el Manual.

Igualmente el Centro de Operación y Emergencia Nacional (COEN) organizará las instancias necesarias para coordinar la Ayuda Humanitaria que en forma solidaria los propios hondureños otorguen a los afectados por una emergencia o desastre. La Cruz Roja Hondureña será la encargada de dar apoyo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) en la asistencia técnica y las operaciones relacionadas con este tema

ARTÍCULO 18.- SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD. Sin perjuicio de las funciones establecidas en otras leyes de la República, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) establecerá con el apoyo técnico de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y otras instituciones técnicas y científicas, la normativa que asegure la prevención y reducción de riesgos en el país.

Las disposiciones obligatorias a reglamentarse estarán destinadas a educar, organizar, regular y vigilar la adecuada aplicación de las disposiciones en materia de Gestión de Riesgos, las cuales deben ser aplicadas, en forma irrestricta, por toda la población. El no cumplimiento de las mismas permitirá deducir responsabilidades administrativas y fiduciarias a todo aquel o aquellos, sean personas naturales o jurídicas, que por sus acciones u omisiones las desatiendan u obstaculicen total o parcialmente.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN PATRIMONIAL Y FINANCIERO.

ARTÍCULO 19.- EL PATRIMONIO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) es un Sistema y por lo tanto no requerirá de patrimonio propio. La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y los demás miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) facilitarán los recursos para su operación y funcionamiento respetando los recursos respectivos de las diferentes instituciones.

Las reuniones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) serán definidas por sus miembros. La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) facilitará las

instalaciones y los demás insumos requerido y que estén a su alcance para el desarrollo de las reuniones del Sistema.

Los recursos financieros necesarios para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y de su Secretaría Ejecutiva no implicarán una nueva línea presupuestaria para el Gobierno de la República, sino que dependerán de los presupuestos de las instituciones miembros, los cuales pueden verse reforzados por programas y proyectos financiados desde la cooperación internacional.

Al no requerir patrimonio propio a nivel fiscal, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) tiene el beneficio de exoneración del pago de Tasas por Matrícula de Vehículos y de los Servicios Turísticos del país.

ARTÍCULO 20.- DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA.

La elaboración, administración y ejecución del Presupuesto será responsabilidad del Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el cual debe presentarlo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) para su aprobación, posteriormente presentará un informe sobre su ejecución a quien corresponda de acuerdo a lo establecido por la ley respectiva. El Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) fijará las remuneraciones, estipendios y bonificaciones del personal de la Institución, dando cuenta de ello al Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sistema se enmarcará en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento de Ejecución y los demás reglamentos que han sido aprobados en materia presupuestaria.

En casos de emergencia nacional o regional, declarada en debida forma por el Poder Ejecutivo o Municipal declarada por cualquiera de las corporaciones municipales, la ejecución de fondos públicos por parte de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) o cualquier otro miembro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), puede llevarse a cabo de forma expedita y sin cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley del Presupuesto, la Ley de Contratación del Estado o cualquier otra Ley relacionada. Cada titular de la institución que ejecute fondos para enfrentar una emergencia, será responsable directo de que el uso de los fondos sea exclusivamente para responder a dichas emergencias y apoyar la recuperación de las condiciones de vida de las personas y comunidades afectadas. Las Instituciones que velan por la transparencia, la lucha contra la corrupción y que actúan como fiscalizadoras del Estado, serán las encargadas de verificar lo establecido en este párrafo.

El Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y cualquier otro funcionario que ejecute fondos públicos o de cualquier origen, destinados a la emergencia, debe informar a quien lo solicite sobre la manera y los detalles en que se han invertido los fondos de atención y recuperación de las emergencias.

ARTÍCULO 21.- DEL FONDO NACIONAL PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS (FONAPRE). Se instituye el Fondo Nacional de Atención de Preparación y Respuesta a Emergencias, que se denominará según sus siglas como el Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE).

Este Fondo estará constituido por recursos financieros que servirán exclusivamente para la preparación de la atención a

emergencias, la atención durante la ocurrencia de catástrofes o calamidades eventuales que se sucedan en el país y el apoyo para la recuperación de las afectaciones inmediatamente posterior a la ocurrencia de los daños.

El Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) será utilizado exclusivamente en las zonas afectadas y será destinado para la asistencia humanitaria, realización de obras necesarias para el restablecimiento de las líneas vitales de las comunidades tales como la recuperación de los sistemas de salud y saneamiento básico, la recuperación de los sistemas de agua y distribución de energía, los sistemas de comunicación terrestres, aéreos, pluviales o marítimos; la recuperación de los sistemas de comunicación telefónicos y el apuntalamiento de zonas de amenaza grave y edificios públicos en peligro y recuperación de viviendas. El Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) también puede ser utilizado para apoyar las operaciones de las instituciones de primera respuesta tales como: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Scout de Honduras, Comités de Emergencia Municipales, Institucionales, Empresariales o Escolares, Voluntarios, Organizaciones religiosas y otros debidamente identificados y miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

El Presidente de la República en su calidad de Presidente o su designado para presidir el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) o el Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), presentará anualmente ante el Honorable Congreso Nacional y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas una solicitud determinando el monto estimado para el Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) para el

año fiscal correspondiente. Los montos a solicitar anualmente serán determinados en reunión del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

El contenido del Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencia (FONAPRE) será administrado por el Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y puede ser ejecutado por cualquiera de los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), teniendo éstos la obligación de liquidar dichos fondos ante la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el tiempo establecido por la administración de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). El no acatamiento de esta disposición implicará responsabilidades conforme a la Ley.

El Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) operará mediante una cuenta en el Banco Central de Honduras y una vez establecido no será sujeto de transferencias a otras partidas institucionales, para no afectar el mismo, ya que su fin es responder exclusivamente a emergencias y a reconstrucciones post-emergencias.

El Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) será acumulativo. Después de terminado el año fiscal, su contenido se dará por ejecutado en términos contables y sus residuos no serán incluido dentro de los fondos para ser devuelto a la Tesorería Nacional. Los fondos efectivamente no ejecutados permanecerán en la cuenta establecida en el Banco Central de Honduras y se acumularán a los presupuestados del año fiscal siguiente.

El Reglamento de esta Ley desarrollará los mecanismos de proyección del Fondo, las consultas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la forma de petición al Congreso

Nacional, los mecanismos para ejecutarlo, su liquidación e informes, todo enmarcado en el Principio de Ética y Transparencia.

El Banco Central de Honduras será el responsable del manejo financiero del Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE), asegurándose el fácil acceso al mismo por parte de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) a fin de poder responder de inmediato en casos de emergencia.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) sólo puede utilizar en cada período fiscal, un máximo del cincuenta por ciento (50%) del monto del Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) para invertir en actividades de preparación para la respuesta a emergencias. El resto del contenido del Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) debe mantenerse acumulado para atender las emergencias que se presenten.

Las actividades de preparación para la emergencia corresponden a las contenidas dentro de Plan Nacional de Contingencias elaborado y coordinado por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

ARTÍCULO 22.- DEL FORTALECIMIENTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS (FONAPRE). La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas debe establecer el mecanismo de financiación y acumulación del Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) de acuerdo con las posibilidades reales del país. Este mecanismo debe ser incluido dentro del Reglamento de esta Ley y puede

modificarse cada vez que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas lo estime conveniente de acuerdo con las necesidades presupuestarias del país.

Las modificaciones a los mecanismos de financiación establecidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, deben concertarse con el Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y estar encaminadas a mejorar la eficiencia del manejo y crecimiento del Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE). Las modificaciones deben ser comunicadas oficialmente al Sistema nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a través de su Secretaría Ejecutiva.

El Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) contará con una asignación presupuestaria anual que no será menor de CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L.5,000,000.00) en términos reales, medidos al valor real del monto del primer año de vigencia de esta Ley.

ARTÍCULO 23.- DE LAS AYUDAS Y DONACIONES.

El Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en su calidad de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), lo mismo que cualquier otro miembro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) debidamente autorizado por el Consejo Consultivo, pueden gestionar ante la comunidad nacional e internacional la obtención de recursos financieros, servicios y bienes materiales, en calidad de donaciones destinados a cubrir toda o parte de los aspectos del Plan de Estratégico o Planes Operativos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Los fondos recaudados, cuando sean destinados a Preparación y Respuesta a Emergencia deben ser

obligatoriamente depositados dentro de la cuenta del Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) en el Banco Central de Honduras. Ésto sin detrimento de los recursos asignados por el Congreso Nacional en el Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la República y otros que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas apruebe anualmente.

Los Fondos destinados al financiamiento de otras operaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) deben ser depositados en cuentas especiales administradas desde la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) o cualquiera de sus miembros.

Todas las donaciones internacionales de bienes materiales o servicios serán coordinadas por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) a través de los mecanismos establecidos.

CAPÍTULO V

DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

ARTÍCULO 24.- LA EVALUACIÓN DE RIESGOS COMO PROCESO DE APRENDIZAJE SOCIAL. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a través de la Dirección de Prevención de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), del Centro Nacional de Investigación y Capacitación en Contingencias (CENICAC) o de otras instancias calificadas, establecerá los requerimientos técnico-científicos necesarios para la definición, medición y determinación de las condiciones que causen riesgos significativos dentro de cualquier actividad desarrollada en el territorio nacional. La Dirección de Prevención con otras instancias técnico científicas a su vez, definirá las medidas de prevención, adaptación y mitigación

necesarias que deben cumplirse obligatoriamente para que ese riesgo sea «aceptable» y permita la instalación de cualquier forma de uso del territorio.

La Dirección de Prevención a través del Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), elevará al Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) la redacción de las Disposiciones Obligatorias para su formalización. Dichas disposiciones deben estar sustentadas en dictamen técnico científicos, que se convertirán en las directrices del trabajo de los «Oficiales de Prevención». Los Oficiales de Prevención, utilizarán fichas técnicas para realizar las tareas de «Evaluación de Riesgo».

Dichas fichas establecerán los parámetros para determinar si una situación o no es de alto, mediano o bajo riesgo.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) trabajará fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales para que sean éstas instancias territoriales las que apliquen las regulaciones concernientes a los procedimientos y contenidos de las «Evaluaciones de Riesgo», las cuales serán de cumplimiento obligatorio.

El no cumplir con dichas disposiciones por parte de las personas jurídicas o naturales implicará la responsabilidad administrativa y multas, independientemente de otras sanciones de carácter civil o penal que la ley establezca.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a través de la Secretaría Ejecutiva puede establecer acuerdos o Convenio con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción, Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y otras instancias, contraloras del Estado, para establecer con ellas los mecanismos de control y seguimiento de las disposiciones relacionadas a la prevención y reducción de riesgos en el país.

ARTÍCULO 25.- GESTIÓN DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTRADA. Todas las instituciones del país, públicas y privadas, sin importar su naturaleza, deben nombrar entre su personal actual un oficial de Prevención dentro su Institución. Estos recursos humanos deben estar ligados de manera inmediata con las máximas autoridades de su respectiva Institución.

El Titular de la Institución debe incluir dentro de las funciones o términos de referencia del oficial de Prevención todas aquellas que sean necesarias para darle seguimiento a las normativas de acatamiento obligatorio, emanadas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y relacionadas a la Gestión de Riesgos.

Adicionalmente el personal de las Unidades de Planificación de cada institución debe incluir dentro de su supervisión y monitoreo, como parte del POA anual, las metas e indicadores de cumplimiento las disposiciones obligatorias emanadas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

Las municipalidades serán las encargadas, una vez que se establezcan las capacidades adecuadas y certificadas por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), de verificar a través de los Oficiales de Prevención, el cumplimiento de las normativas formalizadas por el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) velará porque las municipalidades cumplan con tales normativas.

ARTÍCULO 26.- COORDINACIÓN. Todas las instituciones nacionales, públicas y privadas, pueden ser llamadas a ser parte activa de cualquier estructura del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), de tal manera que se facilite el logro de los resultados y metas específicas que se requieren; las cuales se entenderán como necesidades del más alto interés nacional. Todas las personas naturales y jurídicas que reciban este llamamiento están obligadas según zona declarada de emergencia a atenderlo e integrarse activamente a los planes y programas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

Los Planes de Trabajo y los recursos necesarios para actuar y cumplir con los resultados esperados, pueden obtenerse de diferentes fuentes, sobre todo de recursos nacionales así como recursos brindados por los cooperantes internacionales, de cualquier naturaleza.

Los llamamientos de dichas instancias pueden estar relacionados con cualquier aspecto de la Gestión de Riesgos, tales como: El manejo financiero de los riesgos, la prevención de riesgos, la mitigación de riesgos, la adaptación y mitigación del cambio climático, la preparación para las emergencias, la respuesta a emergencias y desastres y los procesos de rehabilitación y reconstrucción.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) reconoce la labor que realizan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) en la prevención, preparación, atención de emergencias y respuesta humanitaria y es a través de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) que se establecerán los mecanismos de coordinación con tales organizaciones para la reducción de riesgos en el país.

ARTÍCULO 27.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), al formalizar las disposiciones obligatorias que deben regular las acciones de Gestión de Riesgos en el país, considerará apropiadamente las recomendaciones que emanen de los Comités de Consulta. Estas recomendaciones deben estar respaldadas por el dictamen técnico-científico de la Dirección de Prevención de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y deben ser socializadas a todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Dichas disposiciones serán el material fundamental de capacitación a los Oficiales de Prevención a fin de asegurar su cumplimiento.

Todas las personas tienen el deber de cumplir y denunciar el incumplimiento de las disposiciones que emanen del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y de otras normas análogas, pudiendo acudir a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y a las autoridades acusadoras y judiciales correspondientes, quienes deben actuar diligentemente, conforme a su jurisdicción y competencia, para velar fielmente por el cumplimiento estricto de la ley.

El Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) establecerá acciones concretas dentro de sus planes operativos anuales, para fortalecer las capacidades locales y definir propuestas de regulación relacionadas con la Gestión de Riesgos.

Los ciudadanos organizados puedan practicar Auditorías Sociales, necesarias para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de Gestión de Riesgos, participar dentro del voluntariado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) o dentro de las Mesas Nacionales o

Regionales y Comisiones de Trabajo según sus capacidades o preferencias.

ARTÍCULO 28.- INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO COMO PARTE DEL DESARROLLO NACIONAL. Los planes y programas de desarrollo del país deben lograr que este tema sea vinculante y esté integrado con los Planes y Programa de Desarrollo Humano sostenible a nivel local, regional y nacional, en todas las instancias públicas y privadas.

Todas las entidades miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), del Sector Gubernamental y No Gubernamental, deben incorporar a sus estrategias, programas y proyectos institucionales en sus demarcaciones territoriales, las acciones concretas de Gestión de Riesgos.

Los Oficiales de Prevención de cada institución serán las personas encargadas de garantizar este trabajo. La Dirección de Prevención de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Centro Nacional de Investigación y Capacitación en Contingencias (CENICAC) y otras instancias certificadas, serán las encargadas de capacitar a estos Oficiales de Prevención.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) supervisará la incorporación de los componentes de Gestión de Riesgos dentro de los Planes y Programas.

Los planes de rehabilitación y reconstrucción deben contemplar obligatoriamente la reducción de los riesgos preexistentes.

ARTÍCULO 29.- ALCANCE DE RESPONSABILIDADES. El titular del Ejecutivo es la máxima autoridad del

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y en cualquier momento puede asumir ese cargo, aún cuando lo haya delegado formalmente.

En caso de Emergencia el Consejo de Ministros presidido por el Presidente de la República, se convierte automáticamente en el Gabinete de Manejo de Crisis, transformándose la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en la unidad técnica de apoyo y coordinación por decisión del Consejo Directivo.

En el Gabinete de Manejo de Crisis se puede incluir a otras organizaciones e instituciones que el Presidente convoque.

En caso de Emergencia las disposiciones emitidas directamente y de manera oficial por el Gabinete de Manejo de Crisis son de obligatorio cumplimiento y deben ser acatadas por todas las personas que habitan el territorio nacional. Dichas disposiciones deben estar relacionadas con acciones concretas, que busquen asegurar la vida, el ambiente y la protección de los medios de vida de los hondureños y hondureñas, y de todos aquellos y aquellas que nos acompañen dentro del territorio nacional y serán permanentes o temporales según el contenido y disposición que les asigne el Ejecutivo.

ARTÍCULO 30.- ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Todas las disposiciones emitidas en función de la protección de la vida, el ambiente y los medios de vida de los habitantes, deben ser tomadas con el más alto sentido ético, de responsabilidad y de manera transparente, primando el interés social y comunitario ante los intereses particulares o de grupos.

Estas disposiciones serán estudiadas y analizadas dentro del sistema educativo nacional en todos los niveles y difundidas por los medios de comunicación en forma permanente.

Todas las disposiciones en materia de Gestión de Riesgos que sean incumplidas generará la deducción de responsabilidades de cualquier índole. Las acciones para deducir dichas responsabilidades, ante las autoridades correspondientes, las puede iniciar de oficio o por denuncia el Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Toda denuncia implicará un expediente y una investigación conducente a la documentación de los hechos. Las denuncias que sean corroboradas y que contengan un incumplimiento total o parcial de una disposición de carácter obligatorio del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) o de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), tienen como resultado una sanción administrativa y una multa, establecidas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley, indistintamente de otras acciones civiles o penales que la ley establezca.

ARTÍCULO 31.- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD. Todo habitante del territorio nacional tiene la obligación de auxiliar, conforme sus capacidades a otros que estén en situación de calamidad o emergencia. Todas las instituciones públicas y privadas están obligadas a destinar los recursos a su disposición para apoyar las acciones de preparación y respuesta a emergencia, en función de proteger sus propios recursos y de apoyar a las autoridades municipales, departamentales o nacionales. El Gobierno y el pueblo hondureño tienen la obligación de apoyar solidariamente, hasta donde lo permitan sus recursos a otros pueblos y gobiernos, cuando éstos se encuentren en situación de desastre, en caso de que esta ayuda sea solicitada por ellos o que sea de interés nacional.

Todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), sobre todo los territoriales, tiene la potestad

de solicitar apoyo para sí mismos, en caso de necesidad. De todas las emergencias o desastres que se suceden en el territorio nacional, quedan secuelas los pobladores y las víctimas; por lo tanto es deber del Estado brindarles el apoyo necesario por el tiempo requerido, para que sean atendidos en sus necesidades físicas y materiales pero también en su tratamiento psicológico y espiritual.

ARTÍCULO 32.- NO DISCRIMINACIÓN, ENFOQUE DE GÉNERO Y ACCIONES AFIRMATIVAS. Las acciones concretas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), en cualquiera de los aspectos de la Gestión de Riesgos, deben beneficiar en el corto, mediano y largo plazo a la mayoría de las personas que habitan el territorio nacional, extendiéndose hacia aquellas personas compatriotas que viven extra territorio nacional que se encuentren en peligro grave calamidad en otras naciones. No obstante, deben tener especial impacto en aquellos grupos sociales más vulnerables y que tiene menor capacidad de recuperación en caso de desastre, especialmente las niñas y los niños haciendo prevalecer el interés superior de la niñez.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) debe enfocar sus recursos en apoyar fundamentalmente a los niños, niñas, los adultos mayores, las personas con necesidades especiales, debido a cualquier tipo de discapacidad, a los que estén permanente o temporalmente enfermos, a los grupos étnicos, a las mujeres embarazadas, a las familias que son dirigidas por una sola persona, sobre todo si ésta es una mujer, a proteger a las niñas, niños y mujeres que puedan estar expuestas a la violencia de cualquier tipo y, en general, a los grupos humanos más empobrecidos, como uno de los grupos más vulnerables que no tienen capacidad para recuperarse de los daños ocasionados por los eventos naturales.

Las acciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y de las municipalidades deben incluir planes y programas que contengan acciones afirmativas y especiales para estos grupos, para que sean asistidos en debida forma, incluyendo recursos diferenciados en atención a necesidades específicas. Se procurará obtener información de estas situaciones y datos estadísticos segregados por sexo y edad, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que es el ente coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN). La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) designará una persona para que se integre como enlace ante el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

CAPÍTULO VI

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y MULTAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

ARTÍCULO 33.- DEDUCCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Las faltas por incumplimiento a las disposiciones de carácter obligatorio formalizadas por el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y de ejecución por el Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), referidas en esta Ley y en el Reglamento de Multas y Sanciones, de acuerdo a la materia que trata la Ley.

ARTÍCULO 34.- ÁMBITO DE COMPETENCIA. Para el conocimiento y substanciación de los hechos que se tipifiquen como faltas en ésta o en otras leyes, serán competentes los funcionarios encargados de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), las municipalidades u otras instituciones miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) debidamente certificadas por el Comisionado de la

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y denominados Oficiales de Prevención. Las conductas tipificadas como faltas en este Capítulo son de orden público; por lo tanto perseguibles de oficio.

La Fiscalía General de la República a través de sus funcionarios competentes, pueda solicitar a los Oficiales de Prevención copia de los expedientes de las investigaciones de quejas y acciones contra las personas naturales y jurídicas que hayan incurrido en faltas.

Un reglamento especial desarrollará lo relativo a las faltas relacionadas con la Gestión de Riesgos y las funciones precisas que cumplirán los Oficiales de Prevención.

ARTÍCULO 35.- FACULTADES DE LOS OFICIALES DE PREVENCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). Para la observancia y cumplimiento de la presente Ley y sus reglamentos, en el ejercicio de sus funciones, los Oficiales de Prevención de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), sin previo aviso, pueden practicar inspecciones, auditorías técnicas, tomar fotografías, filmados, requerir la exhibición de documentos que amparen los planes o proyectos de desarrollo, u otras acciones afines que se relacionen directamente.

Todo lo que constaten, junto con la respectiva denuncia si ésta existiere, será consignado en un expediente en la Unidad dependiente de la Dirección de Prevención de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) encargada de hacer las documentaciones de expedientes que correspondan. Los

funcionarios de dicha instancia pueden ampliar, desestimar o recomendar las sanciones administrativas y multas que correspondan de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Ley. El Director de Prevención será el encargado de establecer las sanciones y multas que correspondan.

La obstaculización de las funciones de los «Oficiales de Prevención» de los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) que realizan las investigaciones, para establecer la existencia de las faltas a que hace referencia este Artículo, será sancionada como delito de desobediencia establecido en el Código Penal y serán denunciadas por ellos ante la Fiscalía correspondiente.

ARTÍCULO 36.- SANCIONES. El incumplimiento de las disposiciones obligatorias establecidas por el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y debidamente documentadas por los Oficiales de Prevención de las instituciones miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), pueden ser sancionados de la forma siguiente:

- 1) Por un llamado de atención al infractor que obliga a cumplir con la disposición en un término perentorio;
 - 2) Por la obligación de suspensión inmediata de la obra u acción, hasta tanto no exista constancia y compromiso del cumplimiento de las disposiciones establecidas;
 - 3) Una multa que puede comprenderse entre medio y mil salarios mínimos urbanos, que debe ser cancelada en un tiempo perentorio en la Tesorería Nacional de la República;
- y,

- 4) Con la reparación parcial o total del daño a los terceros afectados.

Las sanciones pueden interponerse en conjunto o individualmente.

La reincidencia en la misma falta dará lugar a la calificación del delito de desobediencia.

Las Faltas en materia de Gestión de Riesgos prescriben después de cinco (5) años de realizada la acción que genera riesgo, o menos que los Oficiales de Prevención determinen que el riesgo que generan se encuentre latente. Lo anterior debe determinarse mediante peritaje a costa del infractor, sea persona natural o jurídica.

Todo lo relacionado con las responsabilidades establecidas en esta Ley, será regulado en su Reglamento.

ARTÍCULO 37.- Se consideran faltas:

- 1) Los que impidan o eviten que otros se pongan a resguardo o actúen desacatando las recomendaciones de las autoridades. Ésto será más grave sí la persona es responsable de la protección y cuidado de los que se encuentren en peligro;
- 2) Cualquier persona que teniendo la autoridad suficiente actúe con negligencia, aún teniendo la obligación de ejecutar acciones, supervisar, monitorear o de hacer cumplir las disposiciones obligatorias y no las hubiere realizado y por ello los daños provocados sean mayores.

Los que usurpen la autoridad de un funcionario de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) o de un Oficial de Prevención del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER);

- 3) Las personas que acaten las disposiciones obligatorias parcialmente de manera displicente y aún cuando no pongan en peligro las personas, si lo hacen con animales, medios de vida de otros o del medio ambiente; y,

- 4) Las personas que actúan contraviniendo disposiciones temporales o permanentes destinadas a favorecer las condiciones de asistencia a los afectados y retrasen o impidan con ello las operaciones de rescate, primeros auxilios, evacuación o de asistencia humanitaria de los afectados.

Las personas que pudiendo hacer y teniendo las condiciones para hacerlo no actúen solidariamente con los afectados o las autoridades aún cuando éstos se lo hayan solicitado.

Las anteriores consideraciones de faltas deben ser reglamentadas apropiadamente y se establecerán las multas correspondientes.

ARTÍCULO 38.- NO INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMISIONADO NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO). La actividad del Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) no se verá interrumpida en ningún caso, ni aún en estado de excepción o de sitio. Esta disposición debe garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir su auxilio.

ARTÍCULO 39.- NO INTERRUPCIÓN NI SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS. La interposición de denuncias ante el Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) o los Oficiales de Prevención, por la presunta comisión de una falta en Gestión de Riesgos no interrumpe ni suspende los términos administrativos y judiciales establecidos en las leyes.

ARTÍCULO 40.- NO CENSURA NI INTERFERENCIA.

La correspondencia y las comunicaciones dirigidas al Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), no pueden ser objeto de ninguna clase de censura ni de interferencia.

CAPÍTULO VII**LAS ALERTAS Y DECLARACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRES Y CALAMIDAD****ARTÍCULO 41.- DECLARATORIA DE ALERTAS.**

El Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en consulta con los organismos técnico-científicos encargados del monitoreo y análisis de los fenómenos naturales, será el encargado de declarar los diferentes niveles de alerta, frente a la inminencia, eventualidad o impacto de una amenaza natural o antropogénica.

Los Comités de Emergencia Municipal, presididos por los Alcaldes Municipales, pueden hacer las declaratorias de alerta o emergencia correspondientes a su perímetro municipal.

La declaratoria de alerta debe ser clara, asequible a toda la población, difundida y repetida por los medios de información del país y contener las medidas generales de prevención, preparación y protección que deben tomar la población que se podría ver afectada.

Las declaratorias de alertas pueden ser acompañadas de disposiciones de carácter obligatorio y transitorio.

La alerta puede ser blanca, verde, amarilla o roja, según el nivel de gravedad, y puede ser nacional o limitada a parte del territorio. Los criterios para su declaración y las medidas que

cada una de ellas exige para ponerse en práctica, serán regulados por el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 42.- DECLARATORIA DE EMERGENCIA, DESASTRE O CALAMIDAD.

El Comisionado Nacional puede solicitar por cualquier medio a su alcance, al Titular del Ejecutivo la declaratoria de emergencia, desastre o calamidad correspondiente, teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

- 1) La determinación del tipo de contingencia y la ubicación geográfica de las zonas afectadas;
- 2) La magnitud de los daños ocasionados por la contingencia, en el aspecto humano, económico y productivo;
- 3) La estimación preliminar de la cuantía de los recursos materiales y financieros a utilizarse;
- 4) La descripción de las medidas de emergencia que se han tomado y demás que deben aplicarse para enfrentar el problema;
- 5) Las medidas especiales y particulares y las acciones de cooperación exigidas a la población en general; y,
- 6) Los mecanismos de coordinación adoptados para la recepción, manejo y distribución de la ayuda nacional e internacional.

La declaratoria de emergencia por parte de las Alcaldías Municipales debe justificarse e incluir los mismos aspectos, referidos en los incisos anteriores, pero referidos a sus propios límites territoriales.

ARTÍCULO 43.- CONTENIDO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, DESASTRE O CALAMIDAD. La resolución adoptada por el Titular del Ejecutivo, declarando la emergencia, desastre o calamidad contendrá:

- 1) La delimitación de la zona o zonas afectadas o amenazadas;
- 2) La determinación de las fuentes y la cuantía de los recursos financieros a utilizarse;
- 3) Disposiciones de carácter obligatorio y otras medidas consideradas necesarias;
- 4) El tiempo que durarán las medidas especiales; y,
- 5) Una vez declarada la emergencia y la evacuación de personas en sitios que sean considerados de alto riesgo, las autoridades civiles y militares estarán facultadas a realizar evacuaciones obligatorias con el fin de salvaguardar las vidas humanas.

Cuando la magnitud del desastre lo amerite, la declaratoria será informada en el plazo de veinticuatro (24) horas al Congreso Nacional, a fin de que éste tome las medidas pertinentes dentro de la esfera de su competencia; siendo todas aquellas necesarias para coadyuvar a hacerle frente a la situación.

El Reglamento de la presente Ley regulará las causales de declaratoria de emergencia, desastre o calamidad y sus alcances.

ARTÍCULO 44.- EMERGENCIAS MUNICIPALES.

Las Corporaciones Municipales, al tenor del Artículo 25 del

Decreto No. 134-90, de fecha 29 de Octubre de 1990, contentivo de la Ley de Municipalidades, pueden declarar el estado de emergencia o calamidad pública en su jurisdicción, cuando así fuere necesario y ordenar las medidas convenientes. En tales casos, informará de manera inmediata al Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a través del Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), las razones que motivaron tal declaratoria, así como la correspondiente evaluación preliminar de daños y análisis de necesidades, con el objeto de definir el apoyo necesario de parte de las instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

SECCIÓN ÚNICA

EMERGENCIAS ESPECIALES: EPIDEMIOLÓGICAS, AMBIENTALES, AGROPECUARIAS Y FORESTALES

ARTÍCULO 45.- DE LAS EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y AMBIENTALES. La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, será la encargada de declarar las emergencias epidemiológicas y las medidas de control y prevención del sector salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.65 de fecha 29 de mayo de 1991, contentivo del Código de Salud. La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud coordinará y dirigirá a las otras instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) para hacer un efectivo control epidemiológico.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, en coordinación con la Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), puede recomendar y hacer las declaratorias sobre desastres, emergencias y otras contingencias ambientales.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, en forma coordinada, hará las declaratorias por desastres o emergencias fitozoosanitarias.

ARTÍCULO 46.- DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA FORESTAL. El Comité Nacional de Protección Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONOPRAFOR), contemplado en el Decreto No.98-2007 del 13 de septiembre de 2007, en coordinación con el Comité Permanente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) será el encargado de solicitar la declaratoria de áreas de emergencia forestal.

ARTÍCULO 47.- APOYO A LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA O DESASTRES. El Comisionado Nacional de Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) tiene la obligación de apoyar las acciones contenidas dentro de cualquiera de las declaratorias de emergencia o desastres señaladas en esta Ley, convocar a los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) que sean necesarios para llevar a cabo las acciones concretas, para poder responder a dichos eventos.

Cualquier tipo de declaración de emergencia especial hechas por cualquier autoridad diferente a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), de acuerdo a lo que señala la Ley, tiene la misma categoría y poder de acción, como si las hubiera emitido la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Con dichas declaratorias se pueden ejecutar las actividades urgentes de respuesta que sean necesarias; por lo tanto, las demás autoridades, civiles y militares, no deben minimizar el poder de dichas declaratorias, por lo que deben cumplir a cabalidad lo que se dispone en ellas y ejecutar lo que se les manda.

CAPÍTULO VIII

PREFERENCIA Y CARÁCTER DE LA LEY

ARTÍCULO 48.- PREFERENCIA DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS O DESASTRES. Las disposiciones de la presente Ley constituyen el marco normativo preferente en materia de Gestión de Riesgos y desastres. El Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) formalizará las disposiciones obligatorias a cumplir por todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), para lograr la más conveniente complementariedad en sus funciones. Tales disposiciones deben ser consideradas como parte reglamentaria de las instituciones públicas o de las normativas internas de las organizaciones involucradas.

ARTÍCULO 49.- ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La presente Ley es de orden público y de interés social. Todas las instituciones públicas están obligadas a destinar recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros para impulsar los compromisos contraídos y las disposiciones establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) en materia de Gestión del Riesgo, con el fin de reducir los potenciales riesgos para proteger la vida de las personas. El sector privado está en la obligación de colaborar con el sector público en la prevención y reducción de los riesgos, de manera particular en situaciones de emergencia, desastre o calamidad.

ARTÍCULO 50.- PRIORIDAD DE LAS ACCIONES DE EMERGENCIA: Las actividades desarrolladas para atender a la población en riesgo durante las alarmas y emergencias son para el Estado de la más alta prioridad. Todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y en general todas las instituciones y organizaciones del país deben tener

dispuestos los recursos a su alcance para apoyar las tareas de atención a los evacuados o afectados. Por su seriedad y delicadeza, se prohíbe a cualquier grupo o individuo hacer uso de los bienes materiales o monetarios que done o disponga para hacerse publicidad o sacar provecho impropio. Las contravenciones a esta disposición serán sancionadas según lo establezca el Reglamento de esta Ley.

El Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) o sus representantes autorizados, en momentos alerta o emergencia hará saber a cualquier persona o grupo el entorpecimiento de las labores vitales de protección que pudiere estar sufriendo cualquier miembro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y sino se obedece, estará autorizado para proceder ordenando a la autoridad respectiva para que controle dicha situación y establecerá las sanciones administrativas y multas a los ofensores. El Reglamento de Ley establecerá los montos y las calidades de las sanciones que se interpongan.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 51.- EL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). La actual Junta Directiva de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) será remplazada por los miembros permanentes del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), que establece el Artículo 6 de esta Ley e integrará posteriormente a los miembros temporales, cuando éstos sean electos en debida forma, para que completen el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

Las personas que representan las instituciones gubernamentales miembros permanentes del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) serán nombrados por el período total del Gobierno, que es de cuatro (4) años, con la finalidad de reducir al máximo la interrupción de la continuidad de las personas y evitar que un número excesivo de personas ocupen estos puestos.

ARTÍCULO 52.- ESTRUCTURAS OPERATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). El Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) procederá con la vigencia de esta Ley a modificar las estructuras necesarias para el buen funcionamiento de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), a fin de que las unidades técnicas adscritas a él puedan cumplir con las direcciones necesarias para atender las funcionalidades definidas en la presente Ley.

EL Reglamento de esta Ley definirá la organización y desarrollará las funciones de las estructuras operativas de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en función de los objetivos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y las propias de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

ARTÍCULO 53.- LOS ACTIVOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO). Con la vigencia de esta Ley, los Activos de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) seguirán siendo administrados por el Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

ARTÍCULO 54.- DE LOS CENTROS NACIONALES, CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y

CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN A CONTINGENCIAS (CENICAC) Y CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CENID).

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) reconoce al Centro Nacional de Investigación y Capacitación en Atención a Contingencias (CENICAC) y al Centro Nacional de Información y Documentación (CENID), como instancias de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), al Centro Nacional de Información y Documentación (CENID) se le reconocerá de ahora en adelante con las siglas de "CENID-GDR". Los propósitos de ambos centros serán: El Centro Nacional de Investigación y Capacitación en Contingencias (CENICAC) desarrollará programas, proyectos y acciones de capacitación e investigación en la amplia temática de Gestión de Riesgos; el Centro Nacional de Información y Documentación (CENID-GDR) documentará, informará y promoverá el acceso, distribución y creación de información relacionada con la Gestión de Riesgos.

Cada Centro contará con un Director(a) los(as) cuales serán nombrados(as) por el Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Contarán con estructuras propias, para ejecutar las funciones de apoyo que les encomiende el sistema.

El Centro Nacional de Investigación y Capacitación en Contingencias (CENICAC) y el Centro Nacional de Información y Documentación (CENID-GDR) serán reorganizados reglamentariamente para que puedan responder en la materia de Gestión de Riesgo, tal como lo establece la presente Ley.

ARTÍCULO 55.- OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. De acuerdo a las nuevas políticas y normativas de organización territorial y/o geofísicas que resulten, las estructuras operativas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) se reorganizarán para lograr su efectividad, de acuerdo a los planes y estrategias en Gestión de Riesgos que hayan sido aprobados.

ARTÍCULO 56.- INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y EXTRAREGIONAL. Todos los países de la región centroamericana han actualizado sus normativas enfocadas en la Gestión de Riesgos, incluyendo vinculaciones legales para trabajar coordinadamente, haciendo un frente común para enfrentar los retos que deriva de las amenazas por el cambio climático. Honduras, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), pasará a integrarse formalmente, mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) al Centro de Prevención de Emergencias de Centro América (CEPREDENAC), el cual es una instancia regional creada para responder con más efectividad a la prevención de los desastres y calamidades en el Istmo.

El Sistema puede integrarse a cualquier otra instancia extra regional o extra continental, con la finalidad de crear instancias efectivas de apoyo y solidaridad humana.

ARTÍCULO 57.- INICIO DE FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo iniciará sus funciones en un máximo de quince (15) días después de la vacatio legis determinada para esta Ley. La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) debe hacer las comunicaciones respectivas a las diferentes instancias que deban conformar tal Consejo desde el momento en que esta Ley sea publicada en el Diario Oficial "La Gaceta".

ARTÍCULO 58.- ASEGURAMIENTO DE BIENES.

Todas las instituciones están obligadas a asegurar sus bienes aquellas que fueran calificadas de riesgo generado por desastres naturales o antropogénicos que provoquen un daño público directo y los daños que se deriven de los mismos, previo a la obtención del seguro. Las instituciones deben solicitar al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) una evaluación de riesgos de los bienes a su cargo para posteriormente lograr una negociación efectiva con las compañías aseguradoras de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado y a la Ley General de la Administración Pública.

ARTÍCULO 59.- DEROGACIONES. Se deroga el Artículo 6 de la Ley de Contingencias Nacionales, contenida en el Decreto No. 9-90-E; de fecha 12 de diciembre de 1990; publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 26,348 del 25 de Enero de 1991 y sus reformas, contenidas en el Decreto No. 217-93 de fecha 1 de octubre de 1993; publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 27,237 del 31 de diciembre de 1993.

ARTÍCULO 60.- REGLAMENTACIÓN. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a partir de la vigencia de esta Ley, procederá a reglamentar la misma en un proceso coordinado, participativo e inclusivo, en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días.

ARTÍCULO 61.- VIGENCIA. La presente Ley entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintiún días del mes de julio de dos mil nueve.

JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA PAZ

PRESIDENTE

CARLOS ALFREDO LARA WATSON

SECRETARIO

GONZALO ANTONIO RIVERA

SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto, Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de agosto de 2009.

ROBERTO MICHELETTI BAÍN

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.

OSCAR MATUTE

Avance

Próxima Edición

1) *Decreta: LEY ESPECIAL DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL.*

Suplementos

¡Pronto tendremos!

A) *Suplemento Corte Suprema de Justicia.*

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN:

LA CEIBA	SAN PEDRO SULA	CHOLUTECA
La Ceiba, Atlántida barrio Solares Nuevos, Ave. Colón, edificio Pina, 2a. Planta, Aptos. A-8 y A-9 Tel.: 443-4484	Barrio El Centro 5a. calle, 6 y 7 avenida, 1/2 cuadra arriba de Farmacia SIMÁN. Tel.: 550-8813	Choluteca, Choluteca barrio La Esperanza, calle principal, costado Oeste del Campo AGACH Tel.: 782-0881

El Diario Oficial La Gaceta circula de lunes a sábado

Tels.: 291-0370, 291-0355, 230-6767 y 230-3026

Suscripciones:

Nombre: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Empresa: _____
 Dirección Oficina: _____
 Teléfono Oficina: _____

Remita sus datos a: Empresa Nacional de Artes Gráficas
Precio unitario: Lps. 5.00
Suscripción Lps. 1,000.00 anual, seis meses Lps. 500.00

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 (E.N.A.G.)
 PBX: 230-3026. Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental

Sección "B"

CERTIFICACIÓN

El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia; **CERTIFICA:** La Resolución No. 1163-2004 que literalmente dice: "**RESOLUCIÓN No. 1163-2004.- EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.** Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, quince de marzo del dos mil cuatro.

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, con fecha doce de febrero del dos mil cuatro, P.J. 12-02-2004-1434, por el Licenciado **JUVENCIO ANTONIO RODAS RÍOS**, en su carácter de Apoderado Legal de la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS (APROTOR)**, con domicilio en la aldea de Santa Rosa, Comayagüela, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, contraída a pedir el otorgamiento de la Personalidad Jurídica y aprobación de sus estatutos.

RESULTA: Que el peticionario acompañó a sus solicitud los documentos correspondientes.

RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley habiéndose mandado oír al Departamento Legal de esta Secretaría de Estado quien emitió dictamen favorable.

CONSIDERANDO: Que la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS (APROTOR)**, se crea como Asociación Civil de beneficio mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían las leyes del país, el orden público, la moral y las buenas costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado.

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho de enero del año dos mil dos, por el que delega al Secretario de Estado del Ramo, competencia específica para la emisión de este acto administrativo de conformidad con los Artículos 11, 16, 116, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública, Artículos 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ministerial No. 412-2004 de fecha 10 de marzo del 2004, se llamó al Señor Sub-Secretario de Estado en el Ramo de Justicia, **CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL** para que sustituya al Secretario de Estado, Doctor **JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO**, durante el período del 13 al 25 de marzo del dos mil cuatro inclusive.

POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, en uso de la

atribución constitucional establecida en el Artículo 245 numeral 40 de la Constitución de la República, y en aplicación de los Artículos 29 reformado mediante Decreto 06-98, 116 y 120 de la Ley General de la Administración Pública, 44 No. 6 del Decreto PCM-008 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo.

RESUELVE:

PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS (APROTOR)**, con domicilio en la aldea de Santa Rosa, Comayagüela, municipio del Distrito Central y aprobar sus estatutos en la forma siguiente:

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS (APROTOR)

CAPÍTULO I

DE LA CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1.- Se crea la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS**, como una institución civil, sin fines de lucro, de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrocinio y gobierno propio, su funcionamiento se registrará por los presentes estatutos, los reglamentos, resoluciones y disposiciones que en el futuro emanen de sus autoridades competentes y suplementariamente por las leyes de la República y con domicilio en la aldea de Santa Rosa, jurisdicción de Comayagüela, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, Honduras, Centro América, según se convenga se podrán establecer oficinas en otros lugares del país y en el extranjero, realizará sus actividades en todo el territorio nacional. La **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS**, se identificará con las siglas "APROTOR".

Artículo 2.- La APROTOR, se constituye con la finalidad de promover el desarrollo humano; proteger el medio ambiente; promover el fortalecimiento de los diversos sectores productores de tortillas y sus derivados, contribuir al fortalecimiento y gestión municipal, al desarrollo y organizaciones de las microempresas, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres del campo y de la ciudad organizaciones comunitarias, cooperar con la sociedad hondureña en el mejoramiento de las áreas de la salud, educación ambiental, promover el turismo generación de fuentes de empleo y otras áreas a favor de la misma sociedad.

Artículo 3.- La APROTOR, realizará su trabajo enmarcada en los principios siguientes: a.- Cooperación, solidaridad, participación

democrática y justicia social. b.- Promover, organizar, constituir y atender microempresas, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres del campo y la ciudad, organizaciones comunitarias. c.- El respeto a las distintas formas de organización y empresas sin discriminación política, religiosa, técnica y cultural.

CAPÍTULO II

DE LOS OBJETIVOS

Artículo 4.- Serán objetivos generales de la APROTOR, los siguientes: a.- Contribuir con el gobierno de la República en el desarrollo social, cultural y económico de la Sociedad Hondureña. b.- Promover, la organización y constitución de microempresas, organizaciones campesinas, organizaciones de las mujeres del campo y de la ciudad, organizaciones comunitarias, orientadas a la producción y productividad mediante planes de desarrollo social y económico, equilibrado y autosostenido. c.- Desarrollar programas de asistencia técnica a través de diagnósticos, capacitación empresarial y formulación de proyectos, para todas las organizaciones del campo y la ciudad. d.- Velar por los intereses de la Asociación conforme al desarrollo de los diversos proyectos de infraestructura, financiada por cualquier entidad tanto nacional como internacional. e.- Crear y mantener un ambiente armónico y agradable con otras instituciones sociales, gubernamentales y de carácter privado. f.- Lograr que la Asociación sea una organización con principios democráticos, solidarios, apolíticos sin discriminación por sexo, raza, clase, religión y cualquier otra lesiva a la dignidad humana y apegada al respeto de los derechos humanos. g.- Coadyuvar con el Estado, con sus instituciones y las municipalidades en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo encaminadas en apoyar a los (a) productores de tortillas y sus derivados.

Artículo 5.- Serán objetivos específicos de la APROTOR, los siguientes: a.- Colaborar dentro de las posibilidades de la APROTOR con instituciones públicas o privadas a capacitar en los campos de mayor necesidad a los habitantes de las comunidades. b.- Mejorar dentro de lo posible mediante capacitaciones, la condición económica, social y cultural de la comunidad en que actúa APROTOR. c.- Aumentar el patrocinio a los(a) productores de tortillas mediante el incremento de la producción de las mismas, el estímulo al ahorro, la inversión, el trabajo y la sana utilización de crédito cuando sea requerido. d.- Velar por la preservación natural de la comunidad y la protección del medio ambiente, mediante la capacitación del uso racional del mismo y el patrocinio de proyectos encaminados para tal fin. e.- Fomentar a través de los medios de comunicación, la promoción o propaganda del mercado fidedigno sobre las ventas del producto de nuestras principales industrias, para generar divisas de circulación constante en los diversos sectores de la comunidad. f.- Promover el desarrollo de productores de tortillas y sus derivados para personas de escasos recursos económicos y técnicos a través de proyectos de asistencia técnica. g.- Estimular la iniciativa de productividad individual y colectiva, la solidaridad, la auto-ayuda, el

espíritu de responsabilidad en todos los estratos de la población para solución de sus problemas económicos y sociales en particular y del país en general. h.- Promover y desarrollar proyectos de industrialización en los productores de tortillas y todo lo que las mismas se pueda generar en la comunidad. i.- Promover y dirigir proyectos de apoyo al sector informal de la comunidad. j.- Establecer sistemas de seguimiento, evaluación y atención técnica a las estructuras de grupos organizados en proceso de organización, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres del campo y la ciudad, organizaciones comunitarias en cuanto al apoyo de producción de tortillas y sus derivados. k.- Promover y canalizar servicios de capacitación técnica y especializada en el sector formal e informal. l.- Fortalecer programas dirigidos a las organizaciones de mujeres del campo y la ciudad, mediante el desarrollo de programas comunitarios y capacitación sistemática con el objeto de elevar la dignidad de la mujer y del hombre productor de tortillas y sus derivados y en nivel de vida económico social. ll.- Gestionar y canalizar recursos financieros y técnicos ante instituciones nacionales e internacionales para fortalecimiento de los(a) productores de tortillas. m.- Actuar como representante, intermediaria y depositaria de los intereses de los beneficiarios en la ejecución de sus proyectos en caso de ser solicitado. n.- Apoyar a las organizaciones campesinas, de mujeres del campo y de la ciudad y las organizaciones comunitarias en lo relacionado a la producción tecnificada de tortillas. ñ.- Apoyar a las municipalidades a través de la capacitación y participación dentro de nuestras posibilidades en lo que compete a nuestra finalidad.

CAPÍTULO III

DE LOS MIEMBROS

Artículo 6.- Serán miembros de la APROTOR, las personas naturales o jurídicas, entendiéndose por personas naturales: todos los socios de la organización y como personas jurídicas: las organizaciones que forman parte de ella. Para ser miembro, se requiere además, cumplir con las condiciones exigidas por el reglamento y ser admitido por la Asamblea.

Artículo 7.- La APROTOR, estará formada por: a.- Socios Fundadores, que son las personas naturales o jurídicas que suscribieron el Acta de Constitución. b.- Socios Activos, que son las personas naturales o jurídicas que con posterioridad presentan solicitud de ingreso, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos por la APROTOR y obtener resolución favorable de la Asamblea General; y, c.- Socios Honorarios, son los que aportan conocimientos técnicos especializados a la organización.

Artículo 8.- Se establece igualdad de derechos y deberes de los socios y no habrá diferencia, ni privilegio por razón de antigüedad, profesión u oficio, sexo, raza, posición económica, social y política.

Artículo 9.- Desde el momento de su admisión todo socio estará obligado a cumplir, las disposiciones contenidas en los presentes

estatutos, los reglamentos internos de la APROTOR, las resoluciones de la Asamblea General, los acuerdos de la Junta Directiva y demás regulaciones que le sean aplicables.

Artículo 10.- En cualquier momento el socio podrá solicitar su retiro a conveniencia personal, dicha decisión la notificará a la Junta Directiva y esta la cursará a la Asamblea General para su aceptación. Para lo cual espresará su decisión por escrito, con treinta (30) días de anticipación por lo menos a la fecha en que hará efectivo el retiro.

Artículo 11.- Son deberes de los socios, los siguientes: a.- Pagar las aportaciones Ordinarias y Extraordinarias que la Asamblea General acuerde para constituir el patrimonio de la APROTOR. b.- Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias que se le convoque. c.- Aceptar cargos de elección en los órganos de gobierno de APROTOR y otras responsabilidades en comités y comisiones para los que se le designe. d.- Colaborar con la Junta Directiva y demás miembros, para el logro de sus actividades y objetivos propuestos, dichas actividades las deberá realizar con responsabilidad y ética profesional. Asimismo deberá participar voluntariamente en las actividades que se ejecuten para la APROTOR.

Artículo 12.- Son derechos de los miembros, los siguientes: a.- Participar con voz y voto en las Asambleas Generales. b.- Elegir y ser electo para ocupar cargos en los órganos de gobierno de la APROTOR. c.- Prestar servicios profesionales y recibir información sobre funcionamiento, operaciones y proyectos que ejecute la APROTOR. d.- Recibir bonificaciones y otros beneficios por reconocimiento en relación a la calidad de los servicios prestados a la APROTOR. e.- Proporcionar los servicios técnicos que ofrece la APROTOR. f.- Promover mociones sobre actividades y planes de trabajo. g.- Obtener de la Junta Directiva la credencial que lo acredite como miembro de la APROTOR.

Artículo 13.- La calidad de socio se pierde por las causas siguientes: a.- Por no acatar las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la APROTOR. b.- Por realizar actos contrarios a los fines de la Asociación o que causen perjuicio a la misma. c.- Por aprovecharse por su calidad de miembros, para sus intereses particulares, extremo que deberá ser debidamente acreditado por el órgano competente. d.- Por renuncia. e.- Por incapacidad física o mental. f.- Por expulsión acordada por la Asamblea General por causa fundada y a petición de la Junta Directiva. g.- Por pérdida de la capacidad civil. h.- Por muerte.

CAPÍTULO IV

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 14.- La administración de la APROTOR, será ejercida por: a.- Asamblea General de socios. b.- Junta Directiva. c.- Dirección Ejecutiva; y, d.- Comités Auxiliares en quienes la Asamblea General o la Junta Directiva deleguen responsabilidades.

Artículo 15.- La Asamblea General es el órgano superior de la APROTOR y estará integrada por los socios legalmente convocados y sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros.

Artículo 16.- La Asamblea General podrá ser Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea General Ordinaria deberá reunirse por lo menos una vez al año. La Asamblea General Extraordinaria cuantas veces sea necesario para atender asuntos de importancia y urgentes a juicio de la Junta Directiva o cuando lo soliciten por escrito por lo menos las dos terceras partes de los socios de la APROTOR, para resolver situaciones conflictivas.

Artículo 17.- El quórum requerido por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria será la mitad más uno de los socios y las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los socios que asistan, siendo el voto personal y directo; en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad o sea doble voto.

Artículo 18.- Si las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se desarrollan por segunda convocatoria se considera legalmente constituida con el número de socios que asistan y la misma podrá ser instalada una hora después de la fijada en la primera convocatoria, los acuerdos y resoluciones serán válidas y obligatorias para todos los miembros.

Artículo 19.- La convocatoria para celebrar Asambleas Generales, deberá contener la agenda a desarrollar, día, hora y lugar, firma del Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la APROTOR, o de los socios que la convoquen según el caso y deberá hacerse por lo menos con tres días de anticipación.

Artículo 20.- Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria, las siguientes: a.- Elegir y sustituir a los miembros que integrarán la Junta Directiva; por medio de votación nominal y pública. b.- Conocer de la destitución de los miembros de la Junta Directiva por manifiesta irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. c.- Acordar el ingreso, la expulsión de socios de la APROTOR y conocer de las renunciaciones presentadas. d.- Aprobar los reglamentos internos y manuales de funcionamiento de la APROTOR. e.- Aprobar e improbar la memoria anual de la Junta Directiva y los estados financieros de la APROTOR. f.- Aprobar, improbar y modificar el presupuesto anual de operaciones que presente la Junta Directiva. g.- Establecer las aportaciones Ordinarias y Extraordinarias para constituir el patrimonio social, así como cotizaciones para proyectos específicos de la APROTOR. h.- Conocer de todo tipo de asunto de interés de la APROTOR, que no competen a la Asamblea General Extraordinaria, Junta Directiva y Dirección Ejecutiva. i.- Aprobar la formación de nuevos organismos, de acuerdo al desarrollo de la Asociación. j.- Autorizar al Tesorero la apertura de cuentas bancarias, emisión de cheques y manejo de títulos valores.

Artículo 21.- La Junta Directiva es el órgano superior en la administración de la APROTOR y será la responsable de dictar las

pautas del funcionamiento de la organización y de velar porque se cumplan las disposiciones estatutarias y resoluciones de la Asamblea General y de la misma Junta Directiva. Estará integrada por un número no menor de siete (7) miembros y la estructura será la siguiente: a.- Un Presidente. b.- Un Vicepresidente. c.- Un Secretario. d.- Un Tesorero. e.- Un Fiscal. f.- Un Vocal I. g.- Un Vocal II. Del total de los miembros el porcentaje de personas jurídicas no podrá excederse a la tercera parte. Requiriéndose como mínimo de Vocales dos (2).

Artículo 22.- Los miembros de la Junta Directiva de la APROTOR, durarán un periodo de un (1) año en el desempeño de sus funciones pudiendo ser reelectos, ejerciendo sus cargos ad-honorem.

Artículo 23.- Las Junta Directiva se tendrá legalmente reunida con la mitad más uno de sus miembros y las resoluciones se tomarán por simple mayoría y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad o doble voto. Las sesiones Ordinarias serán mensuales.

Artículo 24.- Son funciones de la Junta Directiva, las siguientes: a.- Nombrar y destituir el Director Ejecutivo de la APROTOR. b.- Nombrar comisiones técnicas y equipos de trabajo para apoyar las actividades del Director Ejecutivo. c.- Presentar a la Asamblea General el informe anual de actividades y los estados financieros de la gestión empresarial. d.- Discutir y aprobar los informes que presente el Director Ejecutivo y los Comités Auxiliares y comisiones en quienes se deleguen actividades y responsabilidades. e.- Evaluar la gestión técnica administrativa del Director Ejecutivo de la APROTOR. f.- Aprobar el plan de trabajo que presente el Director Ejecutivo. g.- Aprobar el presupuesto anual de operaciones. h.- Acordar la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles, así como también autorizar la contratación de empréstitos y la constitución de garantías exigidas por los patrocinadores. i.- Negociar y celebrar toda clase de contratos y convenios para prestar servicios profesionales en el cumplimiento de los objetivos. j.- Autorizar al Presidente de la Junta Directiva para otorgar poderes generales, de administración y especiales y para revocar los mismos. k.- Dictar las políticas generales de administración para el funcionamiento de las distintas áreas de operación de la APROTOR. l.- Aprobar, interpretar, modificar y derogar los manuales de organización, normas operativas y de procedimiento. ll.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y todo tipo de regulaciones internas de la APROTOR. m.- Administrar y dirigir la Asociación. n.- Nombrar y promover el personal que se contrate para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 25.- Son atribuciones del Presidente de la Junta Directiva, las siguientes: a.- Representar legalmente y extrajudicialmente a la APROTOR, otorgar y revocar toda clase de poderes (generales, administración y especial). b.- Presidir las sesiones de Junta Directiva y de Asamblea General. c.- Firmar con el Secretario las convocatorias para celebrar las Asambleas Generales. d.- Velar por el cumplimiento de los acuerdos que emita

la Junta Directiva y la Asamblea General. e.- Conocer de los permisos y ausencias de los miembros de la Junta Directiva. f.- Elaborar y presentar informes de su gestión. g.- Las demás atribuciones que le encomiende la Asamblea General.

Artículo 26.- Son atribuciones del Vicepresidente de la Junta Directiva, las siguientes: a.- Suplir las ausencias permanentes o transitorias del Presidente de la Junta Directiva. b.- Colaborar con el Presidente de la Junta Directiva. c.- Las demás atribuciones que le encomiende la Asamblea General.

Artículo 27.- Son atribuciones del Secretario de la Junta Directiva, las siguientes: a.- Mantener al día los libros de actas de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General. b.- Firmar y despachar las convocatorias para Asamblea General y Junta Directiva. c.- Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Junta Directiva. d.- Extender toda clase de certificaciones, constancias y demás documentos que den fe de las actividades de la Asociación y actuaciones de sus miembros. e.- Otras funciones que se le establezcan en los reglamentos internos o que le delegue la Junta Directiva o la Asamblea General.

Artículo 28.- Son atribuciones del Tesorero de la Junta Directiva, las siguientes: a.- La custodia de los bienes de la APROTOR. b.- Presentar los informes financieros mensualmente a la Junta Directiva. c.- Firmar los cheques que emita la APROTOR, en forma mancomunada con el Presidente de la APROTOR. d.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en los estatutos. e.- Velar por la buena administración de los recursos económicos.

Artículo 29.- Son atribuciones del Fiscal de la Junta Directiva las siguientes: a.- Revisar periódicamente las operaciones, libros de registros y estados financieros de la APROTOR. b.- Hacer verificaciones y arqueos de caja. c.- Comunicar a la Junta Directiva cualquier anomalía que ocurra en la administración. d.- Asegurarse del cumplimiento de las normas estatutarias, reglamentos y resoluciones de la Asamblea General. e.- Presentar informe anual a la Asamblea General sobre el resultado de su gestión, así como también formular recomendaciones para mejorar la administración. f.- Asumir todas las responsabilidades inherentes a su cargo.

Artículo 30.- Son atribuciones de los Vocales de la Junta Directiva las siguientes: a.- Sustituir por su orden las ausencias temporales de los miembros de la Junta Directiva. b.- Las demás atribuciones que le asigne la Asamblea General en coordinación con comités y equipos de trabajo de la APROTOR.

Artículo 31.- La Dirección Ejecutiva es el órgano responsable de la administración de la APROTOR, funcionará en estricto apego de los lineamientos que establezca la Junta Directiva y la Asamblea General en el marco de los estatutos, estará a cargo de un (1) Director Ejecutivo y en caso de ser necesario contará con el apoyo de un Subdirector Ejecutivo. El Director Ejecutivo o el Subdirector

Ejecutivo de la APROTOR, podrán ser uno de los miembros integrantes de la Junta Directiva de la Asociación.

Artículo 32.- Son atribuciones del Director Ejecutivo, las siguientes: a.- Atender las políticas y disposiciones acordadas por la Junta Directiva y Asamblea General, organizar y dirigir la administración. b.- Elaborar y dirigir la ejecución del plan de trabajo y ejecutar el presupuesto de la APROTOR. c.- Gestionar para la APROTOR, convenios y proyectos de asistencia técnica participando en las negociaciones. d.- Coordinar las distintas unidades de trabajo con un estilo participativo de dirección y de trabajo, para cuyo efecto deberá integrar equipos y comisiones técnicas de trabajo. e.- Aplicar las medidas necesarias para asegurar el uso racional de los recursos, protección de los bienes, claridad en las operaciones y una administración eficiente. f.- Aplicar estrategias orientadas al mejoramiento permanente de la calidad de los servicios. g.- Mantener buenas relaciones con los organismos de desarrollo nacional e internacional a fin de proporcionar los servicios que presta la APROTOR. h.- Aprobar y apoyar los programas y proyectos de las unidades de la APROTOR. i.- Autorizar la participación de los empleados en actividades de capacitación dentro y fuera del país. j.- Presentar informes a la Junta Directiva y Asamblea General. k.- Asistir a las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General, cuando así se le solicite, con voz pero sin voto. l.- Crear un clima organizacional interno y externo, desarrollar iniciativas y demostrar capacidad creadora para el crecimiento de la organización e innovar al personal. ll.- Elaborar y presentar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y procurar su aprobación por la Junta Directiva.

CAPÍTULO V

DEL PATRIMONIO

Artículo 33.- El patrimonio social de la APROTOR, estará constituido por: a.- Los bienes muebles e inmuebles que adquiera la Asociación a cualquier título legal. b.- Las aportaciones ordinarias y extraordinarias de sus miembros. c.- Las utilidades que provengan de las actividades que realice la APROTOR. d.- Las donaciones, herencias, legados, préstamos, créditos, transferencias, derechos y privilegios que recibiére la Asociación de personas naturales o jurídicas; así como de organismos nacionales e internacionales. e.- También formarán parte del patrimonio los activos intangibles.

Artículo 34.- Los recursos de operación son aquellos fondos otorgados por personas naturales y jurídicas, los cuales serán destinados para: a.- Cubrir los gastos en que se incurra por la prestación de los servicios de asistencia técnica. b.- Lograr los fines de la APROTOR. c.- Financiamiento de gastos de operación de la APROTOR. d.- Cualquier otro destino que esté acorde a los objetivos de la APROTOR y que previamente sean autorizados por la Asamblea General o la Junta Directiva según su competencia.

CAPÍTULO VI

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 35.- La APROTOR, podrá disolverse por decisión unánime de la totalidad de sus miembros expresada libremente en Asamblea General Extraordinaria y por orden judicial.

Artículo 36.- En caso de disolución de la APROTOR, designará una Comisión Liquidadora integrada por tres (3) personas de reconocida honorabilidad y sus activos se destinarán en orden de preferencia de la manera siguiente: a.- Cubrir las obligaciones con terceras personas. b.- El remanente si lo hubiere se donará al Estado para que sea destinado a actividades de bienestar social.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37.- El ejercicio social de la APROTOR, se inicia en la fecha de reconocimiento de la Personalidad Jurídica y aprobación de sus estatutos y la Junta Directiva provisional asumirá en propiedad el desempeño de sus cargos.

Artículo 38.- Lo no previsto en los presentes estatutos será resuelto por la Asamblea General de acuerdo a los objetivos de la APROTOR y en conformidad a lo dispuesto por la legislación del país en lo que le fuere aplicable.

Artículo 39.- Los presentes estatutos podrán ser reformados total o parcialmente en Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto y por la voluntad de las dos terceras partes de sus miembros.

SEGUNDO: La **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS (APROTOR)**, presentará ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, los estados financieros auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo movimiento económico y contable, indicando su patrimonio actual, así como las modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y donaciones a través de un sistema contable legalizado. Las herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, se sujetarán a la normativa jurídica imperante en el país, aplicable según sea el caso, a través de los Órganos Estatales constituidos para verificar la transparencia de los mismos.

TERCERO: La **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS (APROTOR)**, se inscribirá en la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, indicando nombre completo, dirección exacta, así como los nombres de sus representantes y demás integrantes de la Junta Directiva; asimismo, se sujetará a las disposiciones que dentro su marco jurídico le corresponden a esta Secretaría de Estado, a través del respectivo

órgano interno verificando el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue constituida.

CUARTO: La **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS (APROTOR)**, se somete a las disposiciones legales y políticas establecidas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia y demás entes contralores del Estado, facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar la transparencia de la administración, quedando obligada, además a presentar informes periódicos anuales de las actividades que realicen con instituciones u organismos con los que se relacionen en el ejercicio de sus objetivos y fines para lo cual fue autorizada.

QUINTO: La disolución y liquidación de la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS DE HONDURAS (APROTOR)**, se hará de conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes en el país, de la que una vez canceladas las obligaciones contraídas, el excedente pasará a formar parte de una organización legalmente constituida en Honduras, que reúna objetivos similares o una de beneficencia. Dicho trámite se hará bajo la supervisión de esta Secretaría de Estado, a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y transparencia del remanente de los bienes a que hace referencia el párrafo primero de este mismo artículo.

SEXTO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de ser aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial LA GACETA, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes; sus reformas o modificaciones se someterán al mismo procedimiento de su aprobación.

SÉPTIMO: La presente resolución deberá inscribirse en el Registro de Sentencias del Registro de la Propiedad conforme lo establece el Artículo 2329 del Código Civil.

OCTAVO: Previo a extender la Certificación de la presente resolución el interesado deberá acreditar la cancelación de ciento cincuenta Lempiras (Lps. 150.00) conforme al Artículo 33 del Decreto Legislativo No. 194-2002 que contiene la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social. **NOTIFÍQUESE. (F) CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, POR LEY. (F) JOSÉ OSWALDO GUILLÉN, SECRETARIO GENERAL**".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil cuatro.

KATYA YADIRA MARTÍNEZ
ASISTENTE SECRETARIA GENERAL

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,166-2009**, del 19 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada "**EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES LOS CATRACHITOS**", como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA
Secretaria General
(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,129-2009**, del 10 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada "**EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL DE ACTIVIDADES VARIAS LA FE**" (**ECAVFE**), como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA
Secretaria General
(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de diciembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,164-2009**, del 23 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada "**EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CASTRO**", como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA
Secretaria General
(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de noviembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,120-2009**, del 09 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada **“EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES GOLOSINAS Y TORTILLERÍA EMELY”**, como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA

Secretaria General

(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,130-2009**, del 10 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada **“EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES GAELIZ”**, como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA

Secretaria General

(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,162-2009**, del 23 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada **“EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES VISIÓN VIRTUAL”**, como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA

Secretaria General

(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,161-2009**, del 23 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada **“EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PRESENCIA DE DIOS”**, como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA

Secretaria General

(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de noviembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,119-2009**, del 09 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada **"EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL ESFUERZO"**, como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la aldea Jicarito, municipio de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA

Secretaria General

(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de noviembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,122-2009**, del 09 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada **"EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MAGYENI"**, como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA

Secretaria General

(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

AVISO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2009.

En cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97) y mediante Resolución No. **1,170-2009**, del 19 de noviembre del año 2009, la Secretaría de Industria y Comercio, otorgó Personería Jurídica a la denominada **"EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES AMOR, FE Y ESPERANZA"**, como una empresa de economía social de **PRIMER GRADO**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la cual fue presentada por el Apoderado Legal Abogado **JOSÉ ADOLFO HERNÁNDEZ**.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA

Secretaria General

(Acuerdo Ejecutivo No. 39-2009)

26 D. 2009.

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL**

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS A FINES

Al comercio, agroindustria y público en general, y para efectos de ley correspondiente, se HACE SABER: Que esta dependencia ha presentado solicitud de registro de plaguicidas y sustancias a fin.

El Abg. **MARÍA VICTORIA NAVARRETE FLORES**, actuando en representación de la empresa **NUFARM AMERICAS INC.**, tendiente a que autorice el Registro del producto de nombre comercial: **CHAMP DP 37.5 WG**, compuesto por los elementos: **37.5% COBRE METÁLICO**, en forma de: **GRANULOS DISPERSABLES**.

Formulador y País de Origen: **QUIMETAL INDUSTRIAL, S.A. / CHILE**.
Tipo de Uso: **FUNGICIDA**.

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días hábiles después de la publicación de este **AVISO**, para ejercer la acción antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento Sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias A fines, acuerdo No. 642-98 y la Ley de Procedimientos Administrativos.

Tegucigalpa, M. D. C., dieciocho (18) de diciembre de 2009

"ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR DE LA FECHA"**DR. EDMUNDO OMAR TORO
DIRECTOR GENERAL DE SENASA**

26 D. 2009.

TRANSCRIPCIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio.

TRANSCRIBE: La presente Resolución que literalmente dice: **“RESOLUCIÓN No. 1174-2009. SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.**

VISTO: Para resolver el expediente administrativo No. 1098-2009, contenido de la solicitud de Licencia de Distribuidor y Representante, presentada por la Abogada **HEIDY SAMAYOA SARTI**, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el No. 9820, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil **PROVEEDORES MEDICOS PROMED, S. DE R.L.**, con domicilio en la colonia Santa Bárbara, carretera batallón, Comayagüela, municipio del Distrito Central.

CONSIDERANDO (1): Que el Artículo 4 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, establece que las Licencias para dedicarse a la Representación, Agencia o Distribución serán extendidas por la Secretaría de Economía, actualmente Secretaría de Industria y Comercio.

CONSIDERANDO (2): Que obra a folio tres (3) del expediente de mérito la Carta de fecha 21 de septiembre de 2009, suscrita por la concedente **INTERNATIONAL FARMACEUTICA, S. A. DE C.V.**, con domicilio en carretera No. 44 Col. Parque San Andrés delegación Coyoacan C. P., 04040, México, Distrito Federal, autorizando a la Sociedad Mercantil **PROVEEDORES MEDICOS PROMED, S. DE R.L.**, como Distribuidor y Representante de su línea de productos: Suturas Quirúrgicas, Cera para hueso marca Atrammat y Malla de polipropileno marca PROPY-MESH; asimismo para presentarse a todo tipo de llamado de precios, licitaciones

públicas y privadas, en forma NO exclusiva, en toda la República de Honduras, con vigencia definida de dos (2) años, a partir del 21 de septiembre de 2009 al 21 de septiembre 2011.

CONSIDERANDO (3): Que la Dirección de Servicios Legales, después de valorar la documentación acompañada a la solicitud y considerando el informe emitido por la Dirección General de Sectores Productivos, dictaminó que es procedente conceder a la Sociedad Mercantil **PROVEEDORES MEDICOS PROMED, S. DE R.L.**, la Licencia de Distribuidor y Representante solicitada; de conformidad a lo establecido en el Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras; y la Carta de fecha 21 de septiembre de 2009, que obra a folio tres (3) del expediente de mérito.

POR TANTO: LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en aplicación de los Artículos: 1, 7, 116, 120 de la Ley General de la Administración Pública; 60 literal b) 83, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 2, 3, 4, 5 de la Ley de Representantes Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras; 3, 5 reformados, 7 y 8 de su Reglamento.

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar **CON LUGAR**, la solicitud de **LICENCIA DE REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR**, presentada por la Abogada **HEIDY SAMAYOA SARTI**, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el No. 9820, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil **PROVEEDORES MEDICOS PROMED, S. DE R.L.**, con domicilio en la colonia Santa Bárbara, carretera batallón, Comayagüela, municipio del Distrito Central.

SEGUNDO: Conceder a la Sociedad Mercantil **PROVEEDORES MEDICOS PROMED. S. DE R.L.**, con domicilio en la colonia Santa Bárbara, carretera batallón, Comayagüela, municipio del Distrito Central, siendo concedente la empresa **INTERNATIONAL FARMACEUTICA, S. A. DE C.V.**, de nacionalidad Mexicana, la Licencia de Distribuidor y Representante solicitada, de conformidad al Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras y la Carta de fecha 21 de septiembre de 2009, que obra a folio tres (3).

TERCERO: Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial La Gaceta, por cuenta del interesado, y a la presentación del ejemplar en que conste la publicación inscribese en el registro respectivo que al efecto lleva la Dirección General de Sectores Productivos; de conformidad al Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras.

CUARTO: La presente resolución no agota la vía administrativa y contra ella procede el Recurso de Reposición dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. **NOTIFÍQUESE. SAMUEL BENJAMÍN BOGRÁN FUENTES. Secretario de Estado en el Despacho de Industria y Comercio. ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA, Secretaria General**".

Para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre de dos mil nueve.

ZOILA ELIZABETH SÁNCHEZ LANZA

Secretaria General.

26 D. 2009.

**Comisión Nacional de Telecomunicaciones
CONATEL**

Resolución AS446/09

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) Comayagüela, municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil nueve.

VISTA: La solicitud contenida en las diligencias que obran bajo el número 20090811VA10, presentada por la Abogada Irma Antonia Salinas Pineda, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (SERCOM DE HONDURAS), quien comparece mediante Poder Especial de Representación otorgada a su favor, el cual consta en el testimonio de Escritura Pública número cuarenta y dos (42) de fecha doce de mayo de dos mil nueve, autorizada en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por la Notario Lilian Graciela Ávila Bier, y cuya copia debidamente cotejada corre agregada a las diligencias de mérito.

CONSIDERANDO:

Que la presente solicitud se contrae a solicitar asignación de un (1) Código de Punto de Señalización Internacional (ISPC) y cuatro (4) Códigos de Punto de Señalización Nacional para ser utilizado en la prestación del servicio de Comunicaciones Personales (PCS), a nivel nacional, a utilizarse en las centrales de conmutación instaladas tanto en la ciudad de Tegucigalpa, como en la ciudad de La Ceiba, utilizando el equipo Media Gateway, que también gestionará el tráfico internacional para los usuarios móviles requiriendo por ello de un Código de Punto de Señalización Internacional (ISPC), relacionados con la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), autorizado a la peticionaria, de conformidad al Contrato de Concesión suscrito al efecto y aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto número 80/2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha nueve de junio del mismo año; petición que fundamenta de acuerdo a la necesidad de brindar el tráfico móvil nacional y de Larga Distancia Internacional a sus usuarios; para lo cual ha acreditado los requisitos y formalidades legales, establecidas en el marco regulatorio aplicable en materia de telecomunicaciones y procedimiento administrativo.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resoluciones AS461/03, AS488/05, AS378/06, AS009, AS 343/08 y AS437/08, esta Comisión aprobó y asignó Códigos de Puntos de Señalización Nacional OPC o DPC y Código Internacional (ISPC) a utilizarse en el ámbito nacional así como para gestionar y enrutar llamadas móviles entrantes y salientes a nivel internacional de sus usuarios del servicio de comunicaciones personales (PCS) a favor de la Sociedad Mercantil Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (SERCOM DE HONDURAS) para la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), sumando hasta la fecha un total de treinta y tres (33) Códigos de Puntos de Señalización Nacional y seis (6) Códigos de Punto de Señalización Internacional (ISPC).

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Número NR006/01 emitida por esta Comisión en fecha veintitrés de febrero de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha veinte de marzo de aquel mismo año, emitió el Plan de Numeración de Códigos de Puntos de Señalización para el sistema de Señalización CCITT No. 7, en el ámbito nacional, estableciendo en su Resolutivo Segundo que la asignación de dichos códigos serán asignados por CONATEL y sin costo para aquellos operadores autorizados que cumplan con las condiciones para ser considerados interconectados en Señalización CCITT No. 7. Le corresponde a CONATEL asignar racionalmente los códigos de puntos de señalización a los diferentes operadores y además establecer las normas de administración y regulación de dicho plan. Que asimismo, los Códigos para Puntos de Señalización Nacionales (DPC) son asignados a nivel nacional por los Entes Reguladores de cada país, correspondiendo esa función a CONATEL, disponiéndose en la actualidad de un bloque de códigos para tales propósitos de conformidad con los lineamientos establecidos por la Resolución número NR006/01 referida; asimismo los Códigos de Puntos de Señalización Internacionales (ISPC) son asignados a nivel internacional por la UIT; su administración a nivel de nación ha sido delegada a los entes reguladores de cada país, correspondiendo esa función a CONATEL, disponiéndose en la actualidad de un bloque de Códigos para tales propósitos de conformidad con los lineamientos establecidos por la UIT; por cuanto en aplicación de lo consignado en la Cláusula 10.4 del Contrato de Concesión ya relacionado, referente a que CONATEL tendrá la responsabilidad de otorgar las autorizaciones necesarias para que la Empresa Concesionaria cumpla con sus obligaciones establecidas, esta Comisión determina que lo solicitado es procedente.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a nuestra legislación, la remuneración para el uso de servicios de telecomunicaciones es de interés público y por tanto su asignación, administración y control, corresponde a CONATEL, en consecuencia también se ha establecido que los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones deberán efectuar las coordinaciones correspondientes para la correcta aplicación de las normas de cooperación que deberán existir entre cada uno de ellas, con el objetivo de optimizar los recursos en materia de telecomunicaciones de acuerdo a los avances tecnológicos y su aplicación; por lo tanto están obligados a hacer habilitaciones necesarias en sus centrales a fin de permitir el acceso de sus

abonados a la numeración asignada a los Operadores con los que están interconectados.

CONSIDERANDO:

Que habiéndose escuchado previamente los dictámenes de los órganos consultivos correspondientes, los cuales corren agregados a las diligencias de mérito, esta Comisión determina que siendo que entre las obligaciones de los operadores de servicios de telecomunicaciones se encuentra la de prestar los servicios autorizados dentro de los plazos establecidos y que es responsabilidad de CONATEL otorgar las autorizaciones necesarias para que la Empresa Concesionaria cumpla con sus obligaciones establecidas, así como que el peticionario ha cumplido con los requerimientos indicados en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, su Reglamento General, Plan de Numeración de Códigos de Puntos de Señalización y demás disposiciones legales aplicables, y, que en el caso de autos se ha seguido el debido proceso, procede amitar la respectiva resolución que pone fin al procedimiento administrativo.

POR TANTO:

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en ejercicio de sus atribuciones y facultades, y en aplicación de los Artículos 1, 2 reformado, 12 reformado, 13, 14, 20 y 25 de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones; 1, 4A, 6, 49, 72, 73, 75, 79, 79A, y 173 de su Reglamento General, Resolución NR 006/01 y NR 008/01 de Plan de Numeración de Códigos de Puntos de Señalización; 1, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 64, 72, 83, 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; y, Contrato de Concesión aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto número 80/2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha nueve de junio de dos mil tres, reformado mediante Decreto 57-2004.

RESUELVE:

PRIMERO: Asignar a favor de la Sociedad Mercantil Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V., (SERCOM DE HONDURAS), Empresa Concesionaria del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), un nuevo Código de Punto de Señalización Internacional (ISPC) 7-018-0, con el propósito de gestionar y enrutar el tráfico de las llamadas móviles internacionales del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), de acuerdo a la siguiente estructuración:

Códigos de Puntos de Señalización Internacional

Operador	Punto de Señalización	(Monenclatura UIT)	(Binario)
SERCOM	MGW-CBA1	7-018-0	11100010010000

SEGUNDO: Asignar a favor de la Sociedad Mercantil Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V., (SERCOM DE HONDURAS), Empresa Concesionaria de Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), cuatro nuevos Códigos de

Punto de Señalización Nacional (OPC/DPC), con el propósito de gestionar y enrutar el tráfico de las llamadas móviles nacionales del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), de acuerdo a la siguiente estructuración:

Asignación de Código de Punto de Señalización No. 7 Nacional

Ubicación	Funcionalidad	Identificación del Punto	Tipo	Decimal	Binario 14 bits
Tegucigalpa	Central telefónica para control de conmutación de las llamadas.	MGwTGA2	OPC/DPC	10368	10100010000000
Tegucigalpa	Control de las radiobases o celdas.	BSCTGA3	OPC/DPC	10369	10100010000001
La Ceiba	Central telefónica para control de conmutación de las llamadas nacionales e internacionales.	MGwCBA1	OPC/DPC	10752	10101000000000
La Ceiba	Control de las radiobases o celdas.	BSCCBA1	OPC/DPC	10753	10101000000001

TERCERO: La Sociedad Mercantil Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V., (SERCOM DE HONDURAS), no podrá utilizar ningún código de Punto de Señalización que no haya sido asignado en la presente Resolución, a menos que sea expresamente autorizado por CONATEL, con esta asignación, suma hasta la fecha un total de treinta y siete (37) códigos de puntos de señalización nacional y siete (7) Códigos de Punto de Señalización Internacional (ISPC).

CUARTO: La Empresa Concesionaria SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V., notificará a las empresas operadoras internacionales con las que tendrá intercambio de tráfico telefónico internacional sobre la asignación del Código de Punto Señalización Internacional (ISPC), para las respectivas coordinaciones, así como a los operadores y Sub Operadores de servicios de telecomunicaciones con quienes tengan interconexión, sea directa o indirecta, de los Códigos de Punto de Señalización Nacional que le han sido asignados.

QUINTO: La Empresa Concesionaria SERCOM DE HONDURAS, S.A., no podrá hacer alteraciones en su estructura de numeración de Código de Puntos de Señalización Internacional y Nacional, sin previa autorización escrita por parte de CONATEL.

SEXTO: El Código de Punto de Señalización Internacional (ISPC) deberá ser puesto en operación en un término no mayor a doce (12) meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, para lo cual deberá notificar a este Ente Regulador la fecha de inicio de operaciones del Código de Punto de Señalización ISPC asignado.

SÉPTIMO: La asignación de los Códigos de Puntos de Señalización, autorizados, no están sujetos a cargo alguno, de conformidad con lo dispuesto en el Resolutivo Segundo de la Resolución número NR006/01, que contiene el Plan de Numeración de Puntos de Señalización.

OCTAVO: CONATEL notificará la asignación y activación del Código de Punto de Señalización Internacional (ISPC) a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), asignaciones que

estarán sujetas a la vigencia del Contrato de Concesión del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS).

NOVENO: La utilización del Código de Punto de Señalización Internacional ISPC de manera diferente a la autorizada en la presente Resolución, dará lugar a la revocación inmediata del Código ISPC y será considerada como una infracción muy grave, asimismo se prohíbe la transferencia, venta o comercio del Código de Punto de Señalización Internacional asignado.

DÉCIMO: El Operador podrá solicitar ampliación de los Códigos de Punto de Señalización Nacional No. 7 en forma independiente cuando se alcance un setenta y cinco por ciento (75%) de utilización efectiva del bloque asignado para dicha región geográfica.

DÉCIMO PRIMERO: La Sociedad Mercantil Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V., (SERCOM) está obligada a homologar los equipos que alojen Códigos de Puntos de Señalización y que formen parte de la infraestructura de red pública del operador.

DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución, por constituir un acto de carácter general y de interés público deberá ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta, por la Empresa Concesionaria SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V., (SERCOM) dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución, publicación que deberá acreditar ante CONATEL dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles de su publicación. **NOTIFÍQUESE.**

Miguel Ángel Rodas
Presidente
CONATEL

German E. Martel Beltrán
Comisionado-Secretario
CONATEL

26 D. 2009.